

No. 3

# LEGALIDAD DERECHO Y SOCIEDAD

Octubre 2017

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CUBA

## DIRECTOR EJECUTIVO

Msc. Yamila Peña Ojeda

## REDACCIÓN, EDICIÓN Y CORRECCIÓN

Msc. Caridad Sabó Herrera

Lic. Jessica Rivero Rodríguez

## FOTOGRAFÍA

Adrián Lago del Valle

Carlos Pujols Santana

## DISEÑO GRÁFICO

D.I. Marvin Díaz Valdés

## DIRECCIÓN

Calle 34 No. 1801 e/. 3ª y 5ª.

Miramar, Municipio Playa, La Habana.

CP 11300

## TELÉFONO

(537) 206 1037

## E-MAIL

caridadsabo@fgr.gob.cu,

dcinstitucional@fgr.gob.cu

RNPS: 0653

ISSN: 1819-6543

La Revista Legalidad, Derecho y Sociedad constituye la publicación oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba, emitida con una frecuencia cuatrimestral, como continuidad de la Revista Legalidad Socialista. Es un espacio donde se presentan artículos y ponencias, cuyos autores están fundamentalmente vinculados al sector jurídico, así como noticias y secciones con informaciones actualizadas de interés social.

El Consejo de Redacción posee la potestad para realizar cambios relacionados con la estructura, extensión, redacción y estilo de los trabajos, en función de elevar la calidad de los contenidos a publicar.

Los interesados pueden enviar sus trabajos, opiniones y sugerencias a la Redacción de la revista.

## NOTA AL LECTOR

pag. 3

## NOTICIAS

pag. 4

## ARTÍCULOS

EL BLOQUEO SE MANTIENE

pag. 12

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y EL CAMBIO DE MENTALIDAD ECONÓMICA COMO PARTE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN CUBA.

pag. 14

## PONENCIAS

pag. 18

## LOS FISCALES RESPONDEN

pag. 48

## SABÍAS QUÉ...?

pag. 49

## GLOSARIO DE TÉRMINOS JURÍDICOS

pag. 50

## CONVOCATORIA

RENDICIÓN DE CUENTA A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR 2017

pag. 51

XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2018 Y II EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

pag. 52

OR  
E  
A  
N  
S



# NOTA AL LECTOR

**C**on el presente número continuamos la edición periódica de la Revista “Legalidad, Derecho y Sociedad”, órgano oficial de la Fiscalía General de la República de Cuba.

En el mes de diciembre de 2017, a nuestro Órgano le corresponde rendir cuenta de su gestión a la Asamblea Nacional del Poder Popular, proceso al que convocamos en esta edición y en el que están inmersos todos los órganos y trabajadores de nuestra institución.

En este número exponemos el resultado de investigaciones de especialistas de nuestro Órgano y la Escuela Militar Superior “Comandante Arides Estévez Sánchez”, sobre el cambio de mentalidad económica como parte de la actualización del modelo de desarrollo económico y social en Cuba; la jerarquía de los contenidos constitucionales de la Seguridad Nacional y la utilidad del empleo del bloque de constitucionalidad para su desarrollo; el perfeccionamiento de la gestión de dirección en los procesos penales en la Fiscalía General de la República; la colaboración internacional frente al narcotráfico y otros delitos internacionales; la fase intermedia del proceso penal y la adecuada apreciación del error.

En esta edición podrán encontrar noticias y artículos sobre diversas temáticas del quehacer jurídico y la labor cotidiana de la Fiscalía, además, contestamos preguntas de los ciudadanos sobre materia de vivienda.

Sirva este número como convocatoria al IV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018 y el Segundo Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que sesionará en el Palacio de Convenciones de La Habana, del 14 al 16 de marzo de 2018.

Las informaciones que brindamos en esta edición esperamos que contribuyan a elevar la educación jurídica de todos los ciudadanos y promueva el conocimiento de la actividad fiscal a favor de la sociedad. Este propósito responde a la intención del Órgano de aproximarse cada vez más a los ciudadanos, poniendo a su alcance una revista más diversa, dinámica e interesante.

**FRATERNALMENTE,**

**DARÍO DELGADO CURA**  
**FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA**





# TALLER DE PSICÓLOGOS

## una integración necesaria



Por: **Jessica Rivero Rodríguez**

**R**ecordando el aniversario 139 de una de las gestas más importantes de nuestra historia, que puso en alto la dignidad de los cubanos: La Protesta de Baraguá, inició el Segundo Taller Nacional de Psicólogos y Comunicadores de la Fiscalía General de la República, que sesionó el 15 y 16 de febrero en el Centro de Convenciones de Cojimar, La Habana. Asseneth Verdecia Rodríguez, Fiscal Jefa del Departamento de Formación Académica y Postgrado e investigaciones, de la Dirección de Formación y Desarrollo, presentó el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la primera edición de este Taller, realizado el 18 de septiembre de 2015.

Posteriormente, Yailuma Leiva Maestre, Jefa del Departamento de Comunicación de la Facultad de Comunicación y Alegna Cruz Ruíz, 2da Jefa del Departamento de Ejercicio de la Profesión de la Facultad de Psicología, impartieron la conferencia “Los aportes de la comunicación y la psicología a la gestión

de la comunicación organizacional”. Las especialistas abordaron aspecto que desde ambas ciencias favorecen la comunicación institucional y la percepción de la Fiscalía por los públicos, siempre en vistas al perfeccionamiento de su gestión en pos del cumplimiento de sus funciones. Tras el debate, se inició el trabajo en comisiones, la primera de ellas abordó la organización de funciones laborales de psicólogos y

comunicadores, para dar solución a los problemas que se presentan en el entorno donde se desenvuelven.

En la segunda sus participantes presentaron los resultados de trabajo, obtenidos a partir de la integración de psicólogos y comunicadores con los públicos externos. Mientras, en la tercera comisión debatieron acerca de la integración de psicólogos y comunicadores en el trabajo con el público interno, para propiciar la motivación laboral en el desempeño de las organizaciones. La segunda jornada comenzó con una preparación sobre la subversión política-ideológica para los participantes.

Posteriormente, se presentó la relatoría del taller y se reconocieron las ponencias más destacadas, resultando premiadas Granma, Las Tunas, Pinar del Río, Holguín y las dos delegaciones de Santiago de Cuba. En el Evento participó Iván Hernán Collazo, Funcionario de la Secretaría del Consejo de Estado, Adalberto Aguila Vilar, Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana; profesores y estudiantes de las facultades de Comunicación y Psicología de la Universidad de La Habana, el Consejo de Dirección de la Fiscalía General, encabezado por el Fiscal General; así como los vicefiscales jefes de cada provincias y los comunicadores, psicólogos y periodistas de cada territorio y el Órgano Central.

# SESIONA REUNIÓN NACIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Por: Jessica Rivero Rodríguez

Con el tributo a José Martí y a nuestro invicto Comandante en Jefe, en el Cementerio de Santa Ifigenia en la Ciudad de Santiago de Cuba, inició la Reunión Nacional de Balance del año 2016 de la Fiscalía General de la República, que se extendió los días 21 y 22 de marzo, con el compromiso de materializar las ideas del líder de la Revolución Cubana y continuar su legado.

En este acto que se realizó en el altar glorioso de la Patria, participó el Consejo de Dirección Ampliado de la Fiscalía General, encabezado por Darío Delgado Cura, Fiscal General y los fiscales jefes de todos los municipios del país, de conjunto con los 55 jóvenes que ascendieron al Pico Turquino. Participaron como invitados Lázaro Expósito Canto, miembro del Comité Central y Primer Secretario del

Partido Comunista de Cuba en Santiago de Cuba; Beatriz Jhonson Urrutia, Presidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y miembro del CCPCC; Ivan Ernand Collazo, Funcionario del Consejo de Estado y Annia Poblador Serguera, Primera Secretaria del Comité Provincial de la UJC.

Las sesiones de trabajo iniciaron con un video dedicado a Fidel Castro, en el Teatro Heredia de la ciudad santiaguera, con la participación de 237 delegados. Posteriormente, se presentó el informe de cumplimiento de los acuerdos y decisiones del Balance de Trabajo del año 2016, por parte de la Vicefiscal General del República Yamila Peña Ojeda.



Fue presentado un video resumen de las principales actividades realizadas en la etapa. Posteriormente, el Fiscal General Darío Delgado Cura, realizó un análisis de los resultados de los principales indicadores de trabajo del periodo. Abordó el perfeccionamiento funcional, de composición, estructura y plantilla de la institución, la superación de sus trabajadores, y la labor de las diversas especialidades de trabajo.

De igual forma, se resaltaron y analizaron las prioridades en la prevención y enfrentamiento a fenómenos como la corrupción, el tráfico de drogas, el lavado de activos y otros hechos delictivos y manifestaciones de ilegalidades e indisciplinas sociales.

Tras la presentación, se inició el debate, en el cual los fiscales jefes de diversos territorios mostraron su quehacer, en pos

de solucionar las deficiencias señaladas y mejorar el quehacer de cada órgano provincial y municipal.

Gran énfasis se brindó al trabajo con el público externo, en aras de atender y proteger los derechos de los ciudadanos, aprovechando las vías de comunicación puestas en funcionamiento para este objetivo. También se señaló como prioridad lograr la calidad y celeridad de los procesos penales, como garantía para los ciudadanos, un objetivo continuo.

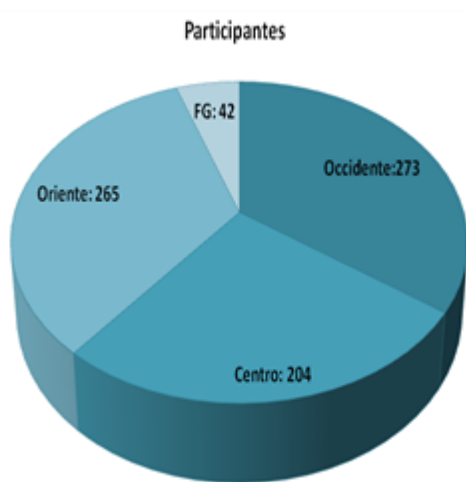
Los participantes, además, manifestaron la importancia del trabajo con el público interno y la vinculación y atención individualizada a los trabajadores. Señalaron el protagonismo de los jóvenes y la necesidad de fortalecer su preparación política- ideológica.

Así mismo, se significó lo importante que resulta la articulación conjunta con otras instituciones y de fortalecer el vínculo con las comunidades donde radican los órganos provinciales y municipales.



# LOS JÓVENES HABLAN!!!

Por: Jessica Rivero Rodríguez



**E**n el 2017 se desarrollaron los VI encuentros del Fiscal General con los jóvenes fiscales y profesionales de otras especialidades de todo el país.

Las reuniones se efectuaron en Matanzas el 19 de abril, la correspondiente a la región de occidente; en Ciego de Ávila el 30 de mayo se reunieron los jóvenes del centro del país; el 23 de junio los de la zona oriental en Guantánamo y el 24 de julio los del Órgano Central.

A los encuentros asistieron 784 jóvenes fiscales, siendo este un espacio para que compartieran sus inquietudes, opiniones e informarlos sobre la labor de la institución.

En sus intervenciones los jóvenes demostraron el agradecimiento al Fiscal General por mantener estos espacios que propician el diálogo directo y transparente. Además, reflexionaron sobre su participación en el proceso revolucionario, la necesidad de estar en la primera línea del combate para preservar el Socialismo y se enfatizó en la necesidad de apoyar el proceso eleccionario y dar el paso al frente ante cualquier tarea que se les asigne.

El Fiscal Jefe de la Dirección de Cuadros presentó, en cada territorio, un resumen de las reuniones que las han precedido y del estado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las mismas.

Se reconoció la labor de los comunicadores y psicólogos en la mejora del clima laboral, los avances

que se aprecian en materia de atención y mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, los adelantos en la tecnología, la comunicación institucional, así como la formación y capacitación del personal.

En estas reuniones han participado dirigentes del Partido Comunista de Cuba, el Poder Popular y la Unión de Jóvenes Comunistas de los territorios y diputados.

Idalena Díaz Casamayor, Diputada a la Asamblea Nacional, expresó en la reunión realizada en Guantánamo, que es la primera vez que asiste a un evento de este tipo, agradeció el espíritu juvenil, señaló que este sector ha estado en la mira de la Asamblea Nacional y que es muy bonito conocer sobre este tema, reconociendo a todos por su participación.

A estas reuniones las preceden las realizadas por los fiscales jefes provinciales con los jóvenes de sus respectivos órganos, para analizar las particularidades de cada territorio.





# BUZÓN “EL CIUDADANO” una nueva vía de comunicación

Por: **Claudia Lis Carpio Moya,**  
Comunicadora de la Fiscalía Provincial de Villa Clara

**E**n todos los locales del Órgano Central, las fiscalías provinciales y municipales del país se colocaron los buzones “El Ciudadano”, nueva vía de comunicación establecida por la Fiscalía General de la República para que los ciudadanos puedan establecer comunicación con ella y tengan mayores facilidades para plantear sus quejas, peticiones y denuncias, mediante la entrega de cartas, documentos y correo postal.

Los buzones están ubicados en lugares visibles, con iluminación, a una altura estándar, a los que tienen acceso los ciudadanos durante las 24 horas, en caso de que no deseen dirigirse a las oficinas de atención presentes en cada fiscalía.

La Fiscalía de Villa Clara también puso en funcionamiento estos buzones en cada uno de los órganos del territorio. La Fiscal Jefe Provincial, Lisnay María Mederos Torres, brindó una entrevista en la que explicó que esta acción forma parte del perfeccionamiento del sistema de atención a los ciudadanos, encaminado a elevar la eficacia y eficiencia de las funciones del fiscal en la preservación de la legalidad y la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos.

Además, recalcó que la Fiscalía cuenta con otras vías alternativas de intercambio con los ciudadanos como la atención personalizada y el correo postal, incorporándose otras opciones de comunicación, como el empleo del teléfono (Línea Única de la FGR) y el portal web, lo que garantiza la inmediatez en el acceso al Órgano.





Porque la juventud cienfueguera  
no exige otra cosa que no sea

# JUSTICIA!!!



Kirenia (centro), a su izquierda Vice Fiscal de Cienfuegos, a la derecha Primera Secretaria de la UJC Nacional

**Por: Dulce María Castellanos Hernández**  
Comunicadora de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos

**K**irenia Vizcay de la Cruz, Fiscal Jefa Municipal de Cienfuegos, fue seleccionada, por sus méritos y labor profesional y revolucionaria, como delegada directa y representante de los jóvenes del Órgano en la 19 edición del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, a celebrarse en la ciudad rusa de Sochi en octubre.

La joven, como parte de las actividades del festival provincial cienfueguero, ejerció el papel acusatorio en el Tribunal Antimperialista realizado en el Parque de la Aduana en este territorio.

Al tribunal le fue propuesto el examen de siete testimonios, que señalan en sí mismos cada una de las principales aristas de las manifestaciones del proyecto genocida desplegado hace más de diez lustros por las administraciones norteamericanas contra Cuba. La abuela de Darío, un niño cienfueguero que sufrió severas quemaduras en su cuerpo y que necesitó piel artificial para recuperarse, narró los sufrimientos de su familia por no poder el país adquirirla por el Bloqueo.

Un profesor de la Escuela de Arte “Ben-ny Moré” narró las dificultades que hoy enfrentan los maestros y estudiantes de música por las carencias de instrumentos para cursar las especialidades.

Un médico intensivista del Hospital Universitario, Clínico y Quirúrgico “Gustavo Aldereguía” expuso cómo se dificulta la noble tarea de salvar vidas por la falta de medicamentos y utensilios médicos necesarios para desarrollar esta labor y que hoy no se pueden importar al país.

Un hombre invidente compartió con los presentes las grandes limitantes que afronta para escribir y leer el sistema Braille, porque Cuba no puede comprar las máquinas y otros elementos que se requieren para ello.

Todos estos ejemplos y la permanencia de nuestra Revolución constituyen clara muestra de la fortaleza y de la evidente predisposición al triunfo de nuestro pueblo independientemente del sacrificio que ello implique. En todo este tiempo el gobierno de Estados Unidos ha venido reforzando esta política vil e inclemente que a quien único afecta es al pueblo de Cuba, mediante la adopción de medidas en muchos casos con categoría de Ley que sólo han venido a reforzar su injusta posición hacia nosotros.

Por esas razones fue llevado ante el tribunal como principal acusado a ese sistema imperialista,

que tiene que ser condenado. Condenado a muerte mediante nuestro trabajo unido y en función del desarrollo y el perfeccionamiento de nuestro sistema económico y social, fusilado por nuestra dignidad y nuestro ejemplo independentista, arrasado de la faz de la tierra por la lucha pujante de los pueblos del mundo y como clara respuesta y satisfacción a todos aquellos que a lo largo de la vida de la Revolución han sido afectados por sus agresiones y sus desmanes. Condenado porque el pueblo de Cuba y la juventud cienfueguera no exigen otra cosa que no sea Justicia.

De igual forma el resto de las Fiscalía Provinciales se han sumado a las actividades previstas para esta celebración de la juventud cubana.

Como parte de la celebración en Granma del Festival de la Juventud y los Estudiantes, la fiscalía municipal de Bayamo dijo presente y dos jóvenes fiscales, Joselín Matos Matos y Yanet Aguilera Rodríguez, representaron ante los 150 delegados y los dirigentes del partido y el gobierno en la provincia, un tribunal antimperialista que una vez más condenó la política seguida por Estados Unidos hacia Cuba.

Como parte de las acciones desarrolladas por la Delegación Provincial de Las Tunas al 19 Festival Internacional de la Juventud y los Estudiantes las Fiscalía de este territorio propició en la mañana de este 11 de julio, un intercambio con los 25 delegados a este magno evento.





# MAÑANA DE AGASAJO para los trabajadores

Por: Jessica Rivero Rodríguez

**E**n vísperas de cumplirse el 64 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Administración Pública entregó a la Fiscalía General de la República la Condición Colectivo Distinguido Nacional que otorga esta organización, en acto realizado en el Centro de Convenciones de Cojimar.

Este constituye un reconocimiento a los resultados alcanzados por la institución, y al esfuerzo y consagración de sus trabajadores.

El colectivo laboral del Órgano también recibió el reconocimiento “Por las sendas del triunfo”, que concede la Central de Trabajadores de Cuba a trabajadores y colectivos que han dado un máximo de esfuerzo en el cumplimiento de los planes de la economía de nuestro país en el 2do semestre del año, momento donde existen donde por condiciones naturales existe mayor uso de los portadores energéticos y es necesario una voluntad superior en aras del ahorro energético.

En esta mañana de agasajos se recordó el hecho que en 1953 fue el impulsor de la Revolución Cubana y marcó el inicio de una nueva etapa de lucha armada, pues los trabajadores de la Fiscalía de todo el país son ejemplo de la

consagración, la valentía y el espíritu que caracterizó a la Generación del Centenario y que aquel 26 de julio se lanzó a la lucha, con el amor a la Patria y el sueño de un futuro mejor como convicciones.

En la jornada a Gisela Fernández Menocal y Oscar Julián Herrera Solano se les fue concedida la Condición Enrique Hart que entrega el Sindicato Nacional de los trabajadores de la Administración Pública en reconocimiento a los méritos alcanzados por trabajadores durante 20 o más años en el sector de la administración pública y por haber tenido una actitud ejemplar y consecuente con los principios revolucionarios.

También le fue entregado a Mónica Corral Martín el carnet que la acredita como nueva militante de las filas del partido Comunista de Cuba.



# EL BLOQUEO

## SE MANTIENE



Por: Jessica Rivero Rodríguez

**H**ace 55 años el pueblo cubano sufre una de las políticas más crueles y largas en la historia: el bloqueo. El 7 de febrero de 1962, el Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, declaró el bloqueo total contra Cuba amparado en la Ley de Ayuda Extranjera, de septiembre de 1961. Pero los antecedentes de esta ley se remontan a 1959 cuando Estados Unidos comenzó a aplicar políticas de bloqueo contra Cuba, dirigidas esencialmente a socavar puntos vitales de la defensa y la economía cubanas.

¿Pero en qué consiste el bloqueo? Este es un conjunto de medidas de coacción y agresión económica, comercial y financiera que entrañan una conducta genocida, intencionada para lograr el aislamiento, la asfixia y la inmovilidad de Cuba.

El gobierno estadounidense esgrime que estas

medidas se tratan de un embargo y no de un bloqueo, y aunque a veces se utilizan como sinónimos estos dos términos, en realidad su esencia entraña una gran diferencia, ¿por qué?

Pues el embargo consiste en una orden o proclama emitida por un Estado en tiempo de guerra. Es una forma judicial de retener bienes para asegurar el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. Puede ser también una medida precautoria de carácter patrimonial autorizada por juez o tribunal o autoridad competente, con igual propósito de cumplir por el deudor sus compromisos con sus acreedores.

Mientras, el bloqueo es un acto de guerra, definición establecida como principio del derecho internacional en la Conferencia Naval de Londres realizada en 1909. Además, esta política califica como “crimen internacional de genocidio”, conforme a lo definido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948.

A partir de estas dos definiciones se explica por qué se trata de un bloqueo y no un embargo, al tener diferentes esencias y objetivos. Además, Cuba no es deudora de los Estados Unidos y no ha cometido ningún delito que autorice el secuestro y liquidación de sus bienes a favor del gobierno norteamericano.



Cuba tampoco ha sido ni es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, por lo que aplicar medidas de legítima defensa resulta contrario a la ley internacional. Por lo tanto, estas acciones ejercidas contra Cuba no califican como embargo, es un término empleado para no reconocer que se aplican medidas de tiempo de guerra contra nuestro pueblo. Sin embargo, todas las medidas establecidas para someter a Cuba sí tipifican como un “bloqueo”.

Aclarado que constituye un bloqueo y no un embargo lo que sufrimos los cubanos hace más de 5 décadas, entonces veamos cuál es el objetivo que tiene la implantación del bloqueo, y es someter al pueblo a condiciones que le pueden acarrear daños físicos, totales o parciales, es incomunicarnos con el exterior. ¿Para qué?, pues para lograr la rendición del país por la fuerza o por el hambre, debilitar nuestra convicción de luchar y vencer, llevarnos a claudicar. Pero ninguna de las tantas medidas y acciones realizadas mediante este acto de genocidio, el más prolongado de la historia, han logrado estos propósitos, ni lo harán.

El bloqueo constituye una ley y por ello tiene sus particularidades, además de representar una acción abierta contra nuestro gobierno y pueblo, pero a pesar de este carácter legislativo es ilegal para con nosotros. Quizás parezca una contradicción que se califique como ilegal una ley, pero no es así, pues, el bloqueo es una sanción unilateral y no existen argumentos que sustenten la prolongación de una situación de emergencia nacional, cuando no somos una amenaza. Igualmente, impide que Cuba, por diferentes vías, desarrolle vínculos económicos, comerciales y financieros con terceros, para lograr los objetivos ya señalados.

Además, y esta razón está respaldada por la definición de bloqueo, el mismo constituye un acto de guerra, por lo tanto, están aplicando medidas de tiempo de guerra a Cuba en tiempo de paz, y no se ha emitido ninguna norma en el ordenamiento internacional que refrende el bloqueo en tiempo de paz.

De igual forma, contraviene los principios y derechos fundamentales del Derecho internacional: el principio de igualdad soberana, el de no intervención, el de la Independencia y Derecho a la nacionalización, además es una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo de Cuba.

Entonces, por qué no se ha eliminado el bloqueo, a pesar de la ilegalidad demostrada, de los daños infligidos contra los cubanos, las consecuencias

económicas, financieras y comerciales para nuestro gobierno y los terceros que realizan negocios con nosotros; los daños en la salud, la investigación, la educación, agricultura y en prácticamente todos los sectores, los cuales implican un retraso en nuestro desarrollo económico.

Incluso el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, reconoció cuan infructuosa y arcaica es esta política, el 17 de diciembre de 2014, en su proclama al iniciar el proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, al constituir un fracaso el bloqueo y la necesidad de realizar un cambio en este sentido.

Pero es que al ser una ley, solo el Congreso de este país puede abolir dicho bloqueo, no obstante, el ocupante de la Casa Blanca puede reducir ciertas restricciones a través de sus facultades ejecutivas como presidente. Desde el histórico acuerdo de diciembre se han establecido ciertas medidas encaminadas a este propósito, pero no son suficientes, aun se siguen imponiendo multas a países e instituciones que establezcan negocios con Cuba, especialmente los bancos, y lo más importante el bloqueo se mantiene vigente.

Incluso para aquellos más escépticos y que confían en cifras, tenemos muchas a favor del cese del bloqueo, desde 1992 Cuba ha presentado la Resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, la cual ha sido aprobada, cada vez con más apoyo.

Esta resolución reafirma los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y no injerencia en los asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Además, muestra la preocupación de la Comunidad internacional en la aplicación de medidas dirigidas a reforzar y ampliar el bloqueo y por los efectos negativos sobre la población cubana y nacionales cubanos residentes en otros países.

A lo largo de dos décadas cada vez más países votan contra el bloqueo e instan a Estados Unidos a revertir sus medidas. En las últimas votaciones 191 naciones votaron a favor de nuestra resolución, y solo dos en contra: Estados Unidos e Israel, los cuales son recurrentes desde las primeras votaciones. Pero el año anterior tuvo una particularidad, ningún país se abstuvo, lo que muestra el respaldo mayoritario y que a nadie le queda dudas de lo cruel e inhumano que es el bloqueo para Cuba.

# COMUNICACIÓN

LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Y EL CAMBIO DE MENTALIDAD ECONÓMICA  
COMO PARTE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL  
MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
Y SOCIAL EN CUBA.



**Autora: Yamilet Suárez Alonso**

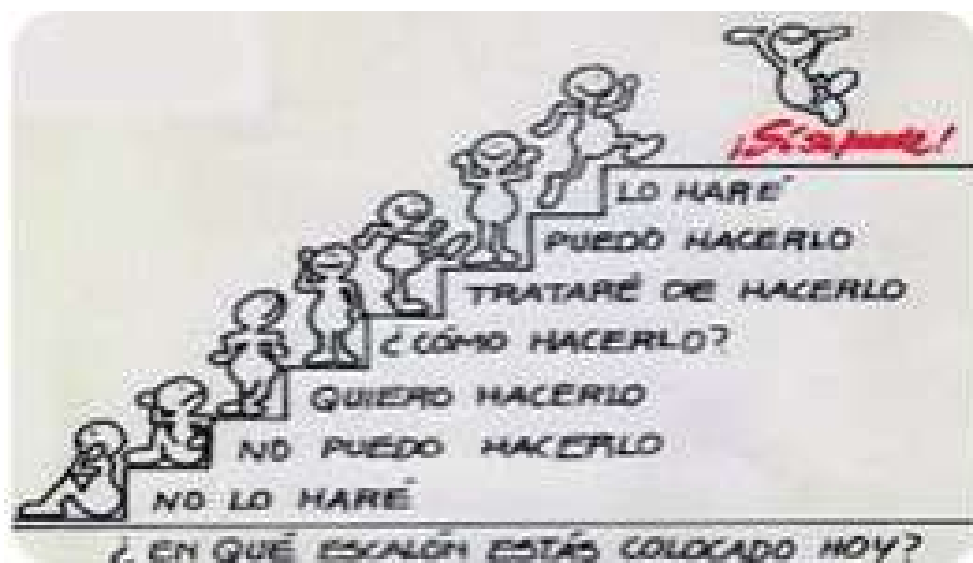
Gestora A en Comunicación y Marketing  
Fiscalía Provincial de Las Tunas

**L**a insistencia en el cambio de mentalidad, a veces se convierte en mera consigna y suele pasar por alto el principio marxista del condicionamiento-en última instancia-de la conciencia social por el ser social. Por tanto, no puede haber cambio de mentalidad económica ajeno al cambio de las condiciones de producción,

más de 50 años una institucionalidad sustentada en un andamiaje jurídico, un modelo económico, normas de comportamiento, cultura y conciencia económicas cotidianas, tan volumétricas y gravosas, que modificarla no es cuestión de poco tiempo. Sin embargo, esto no puede conducir a un fatalismo teórico y psicológico, en el sentido de considerar de que poco se puede hacer ante tal ambiente o que hay que cambiar primero la institucionalidad para que, automáticamente, como mágico corolario se desprenda el cambio de mentalidad.

Es importante asumir que ambos son procesos paralelos y unísonos, en los que la educación económica, el trabajo político-ideológico bien concebido y ejecutado, los medios de comunicación masiva, los Sistemas de Escuelas del Partido y del Estado, el Sistema de Educación General y Superior, la Fiscalía General de la República, entre otros factores, tienen que colocarse a la vanguardia, para librar y ganar la nueva batalla.

Es por ello, que en el contexto de la función social de la Fiscalía, constituye un desafío jurídico-comunicacional el potenciar el cambio de mentalidad económica en los ciudadanos, dado el proceso de actualización del modelo de desarrollo económico y social que emprende Cuba. Ante este reto, ha de considerarse que “no hay cosa más difícil de emprender, ni resultado más dudoso, ni de más arriesgado



distribución, cambio y consumo.

Sobre este se ha levantado durante

manejo que ser el primero en introducir nuevas disposiciones, porque el introdu-



cir tiene por enemigos a todos los que se benefician de las instituciones viejas, y por tibios defensores a todos aquellos que se benefician de las nuevas, tibieza que procede en parte, en la incredulidad de los hombres, que no creen en ninguna cosa nueva hasta que la ratifica una experiencia firme” (Maquiavelo.1513) .

De ahí que sea imprescindible adentrarnos en la conceptualización teórica-práctica de lo que pudiera considerarse como cambio, el que no puede verse alejado del resultado de un proceso social dado a partir de un acontecimiento cultural generalmente extenso y complejo en el que intervienen diferentes protagonistas, marcado por el desarrollo histórico y las transformaciones sociales, políticas y económicas que muestran el comienzo de una nueva época y que se producen con un carácter irreversible. Dentro de los tipos de cambio se incluyen: los objetivos, los subjetivos, los internos, los externos, los dirigidos y los espontáneos.

Por otro lado, la mentalidad desde su gnoseología es el modo de pensar y de vivir de una persona, un grupo, un pueblo u otra comunidad <sup>(1)</sup>. El término se ha usado desde principios del siglo XX para definir las estructuras sociales como expresión de la cultura. La historia de las mentalidades ha sido un tema crucial en los estudios de historia, sociología y psicología social. Enfocando la mentalidad desde la economía política se puede definir como el modo en que las personas, grupos y clases sociales piensan la economía y consideran su participación en ella desde la producción, la distribución, el cambio y el consumo (García Valdés. 2013). Luego de lo expuesto es justo preguntarse qué papel le corresponde a la Fiscalía General de la República en este aspecto.

Resulta oportuno explicar que la mentalidad económica, como parte de la conciencia social está determinada -en última instancia- por el ser social y

más concretamente por las relaciones de producción dominantes. Cuba es un país que construye el socialismo o transita hacia el socialismo desde el subdesarrollo, sometido a presiones externas que no han estado presentes con tanta intensidad en otras experiencias de transición del capitalismo al socialismo.

En consecuencia la mentalidad económica en nuestra nación refleja en primera instancia el tipo de sociedad y las relaciones de producción que le son inherentes, pero en última instancia, tal mentalidad está condicionada por el modelo económico o las formas concretas de organización, funcionamiento y reproducción de esas relaciones.

El Artículo 127 de la Constitución de la República, reconoce a la Fiscalía General de la República como el “Órgano del Estado al que corresponde como objetivos fundamentales el control y la preservación de la legalidad sobre la base de la vigilancia del estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos, y la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado.”<sup>(2)</sup>

La Fiscalía General de la República, posee entre sus funciones la de “contribuir al desarrollo de la conciencia jurídica ciudadana mediante actividades de divulgación y de carácter científico,”<sup>(3)</sup> aprovechando esta función podría posibilitarse a mediano y largo plazo que actitudes que niegan los cambios que acontecen a propósito de la actualización del modelo de desarrollo económico y social potencien hechos delictivos y conductas antisociales denigrantes de la imagen nacional e internacional de Cuba.

La interacción entre el modelo económico y la mentalidad económica que le es consustancial está reflejando la dialéctica entre lo objetivo y lo subjetivo, entre la economía y la política y entre estas, la ideología y la conciencia económica cotidiana.

(1) Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007. Larousse Editorial, S.L.

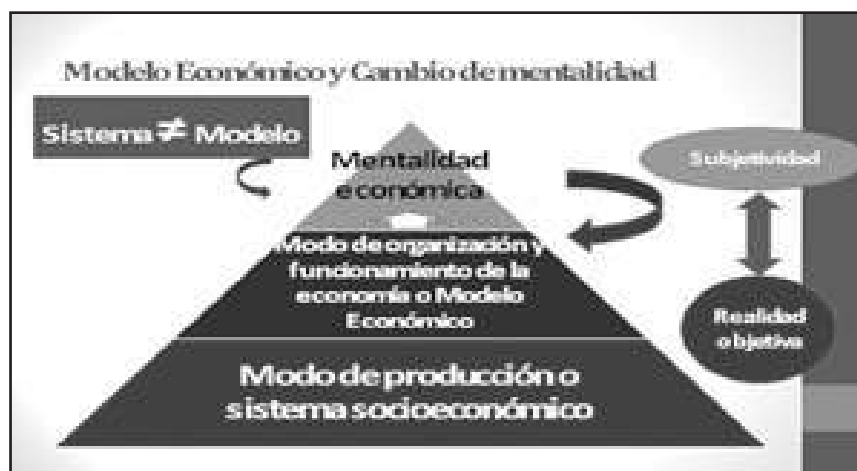
(2) Ley No. 83 de la Fiscalía General de la República. Título I: La Fiscalía General de la República. Capítulo I: Disposiciones Generales. Artículo 1.

(3) Ley No. 83 de la Fiscalía General de la República. Título I: La Fiscalía General de la República. Capítulo III: Funciones. Artículo 8.

La siguiente figura<sup>(4)</sup> trata de esquematizar tales conexiones e in-

teracciones. La siguiente figura<sup>(4)</sup> trata de esquematizar tales conexiones e interacciones del excesivo enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la Revolución en aras de la justicia social” (Castro Ruz. 2010).

El General de Ejército también alertó que “No es posible que nosotros en aras del cambio perdamos también las esencias, si vamos a hacer un cambio de mente, lo primero que tenemos que hacer es básicamente cambiar tácticamente, coherentemente, el ambiente. El gran cambio de mentalidad tiene que venir por cambiar inevitablemente los comportamientos. Al



teracciones. Según Manuel Calviño, el cambio de mentalidad es el proceso de rompimiento de equilibrios, transformaciones, ruptura con el pasado para dar paso a una nueva cualidad; que suceden en el modo de pensar y de actuar de los individuos. Afirma además, que esta es la principal barrera, porque tenemos que modificar la mentalidad desde nuestra propia mentalidad, al igual que tenemos que actualizar el modelo económico con los mismos hombres que lo han protagonizado, lo que incluye los papeles secundarios y los extras, el modelo excesivamente centralizado cargado de lastres, parches y dogmas, pero es algo que ya se ha hecho, por ejemplo en los ochenta con la rectificación de errores.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros ha identificado y subrayado que el principal problema para la actualización del modelo de desarrollo económico es cambiar la mentalidad de todos los miembros de la sociedad. Por tal motivo expresó: “Es necesario cambiar la mentalidad de los cuadros y de todos los compatriotas al encarar el nuevo escenario que comienza a delinearse. Se trata sencillamente de transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo, muy enraizado en amplios sectores de la población durante años, como consecuen-

cia del excesivo enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la Revolución en aras de la justicia social” (Castro Ruz. 2010).

El General de Ejército también alertó que “No es posible que nosotros en aras del cambio perdamos también las esencias, si vamos a hacer un cambio de mente, lo primero que tenemos que hacer es básicamente cambiar tácticamente, coherentemente, el ambiente. El gran cambio de mentalidad tiene que venir por cambiar inevitablemente los comportamientos. Al final los modos de funcionamiento son los que hacen las reglas” (Calviño. 2012). La idea de que el socialismo desde su construcción se encarga del aseguramiento del bienestar material y espiritual de todos los miembros de la sociedad de forma gradual y racional, es algo que no se tiene que cambiar. La Fiscalía General de la República como veladora de los derechos y garantías de los ciudadanos y el perfeccionamiento continuo de esta actividad, debe contribuir a mantener en el imaginario del pueblo, incluso en lo más profundo de su conciencia, la seguridad de no quedar abandonado, a pesar de los cambios económicos y sociales que actualmente se implementen. Esta función constitucional es esencial para alcanzar “el cambio de mentalidad económica” necesario.

La nueva mentalidad exige de los jefes dirigir con apego a las leyes y normas, explotar al máximo las facultades que le son inherentes, aceptar los riesgos y utilizar vías expeditas de dirección. Al decir de Raúl Castro (2012) durante el VI Congreso del PCC, “para descentralizar y cambiar la mentalidad, es imprescindible elaborar el marco regulatorio que defina con claridad las facultades y funciones de cada eslabón, desde la nación a la base, acompañadas invariablemente por los procedimientos de control contable,

(4) García Valdés, Carlos Manuel. 2015. “Ponencia sobre cambio de mentalidad económica”.

financiero y administrativo”.

La Fiscalía General de la República asume esta premisa desde las funciones controladoras, preventivas, educativas y detectoras de la Dirección de Verificaciones Fiscales, que velan por el estricto cumplimiento de las normas y el funcionamiento integral de los organismos e instituciones, la tutela de los valores e intereses del Estado y la sociedad contra todas las violaciones de la legalidad, la influencia y persuasión a los colectivos laborales para la eliminación de las violaciones detectadas, así como las causas y condiciones que propiciaron los hechos delictivos, detectando en la mayoría de los casos a los presuntos responsables, e informando a cada uno de los organismos u organizaciones que correspondan para su erradicación.

El Doctor Carlos Manuel García Valdés afirma que la franja que divide el economicismo de la corrupción puede ser tan delgada como frágil. No pocos casos de corrupción y de corruptos se han refugiado en la falsa pretensión de elevar la producción y las ganancias de una entidad estatal, mixta o de otro tipo, para “cumplir” o “quedar bien” con la economía y la sociedad. De ahí que el economicismo no es un problema económico, o no es solo económico, sino también político y ético-moral y esto lo ubica directamente en la esfera de atención del Partido y de la Fiscalía en toda su estructura de funcionamiento, como Órgano protector y defensor de la legalidad socialista y que debe coadyuvar, con el cumplimiento eficaz de sus funciones, al cambio de mentalidad económica que requiere el país.

## CONCLUSIONES

El cambio de mentalidad económica debe favorecer tanto el apego a los principios básicos de dirección de nuestra economía de carácter socialista, primando tanto la planificación objetiva directamente conectada con el mercado,

así como la observancia de los principios y valores político-ideológicos de la sociedad cubana.

La Fiscalía General de la República debe consolidar desde su misión la estrategia político-comunicacional que desarrolle a nivel social una conciencia jurídica –económica que medie entre las indisciplinas sociales, los hechos delictivos, la corrupción y otras manifestaciones incoherentes con el desarrollo económico y social de Cuba, donde fiscales y personal no fiscal desempeñarán un papel primordial en el cumplimiento eficaz este deber.

## BIBLIOGRAFÍA

Castro Ruz, Raúl. 20 de diciembre de 2010. “Discurso en la clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del poder Popular”. La Habana, Cuba.

Castro Ruz, Raúl. 2012. “Informe Central al VI Congreso del PCC”. La Habana, Cuba.

Calviño, Manuel. Abril, 2012. Conferencia en el Taller de Preparación de Jefes y sus reservas. Estudios Baraguá.

Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. 2007. Larousse Editorial, S.L

García Valdés, Carlos Manuel. Abril 2013. “Algunas expresiones del cambio de mentalidad como parte de la actualización del modelo económico”. Ponencia.

García Valdés, Carlos Manuel. 2015. “Ponencia sobre cambio de mentalidad económica”.

Ley No. 83 de la Fiscalía General de la





# PONENCIAS



**Autor: Iván Ermand Collazo**

Funcionario de la Secretaría del Consejo de Estado

PENSAMIENTO DE FIDEL CASTRO RUZ SOBRE LA LUCHA CONTRA EL DELITO Y SU PREVENCIÓN”.

**E**l ideario de Fidel Castro Ruz es universal por su extensión mundial y por sus aportes en diversos campos del saber. Pretendo en esta ocasión exponer algunos de sus pensamientos, que bien deberían tenerse en cuenta en la Criminología, ciencia penal, que como se sabe, tiene entre sus objetivos de estudio las causas y condiciones que propician los delitos y las vías para su prevención.

En este sentido, considero que Fidel nos ha enseñado cinco principios interconectados que debemos observar en cualquier análisis sobre este tema. Ellos son:

- El delito es un fenómeno multicausal.
- El enfrentamiento a las conductas delictivas requiere de la prevención, la represión y la reeducación, siendo la prevención lo fundamental.
- La educación es principal en la prevención de las conductas delictivas.
- En la prevención y el enfrentamiento de las conductas antisociales debe intervenir todo el pueblo.
- Las causas y condiciones que originan las referidas conductas hay que encontrarlas en las

circunstancias sociales imperantes en la actualidad.

## 1- EL DELITO ES UN FENÓMENO MULTICAUSAL.

El estudio de las causas del delito data desde la antigüedad. Se plantea que en la edad media y hasta el siglo XVII, la teoría más antigua estaba basada en la Teología, la que afirmaba que los delincuentes eran personas que cometían crímenes de una forma deliberada, porque estaban instigados por el demonio u otros espíritus malignos.

Posteriormente, durante muchísimo tiempo los estudiosos sobre las causas de la criminalidad se distinguieron por explicar este fenómeno preponderando una sola causa, la que además desconectaban de cualquier relación con otras variables o factores, basándose fundamentalmente en el positivismo como método.

Así, en la literatura científica se recogen múltiples teorías, que los autores tienden a clasificarlas en biológicas (fisionomía, antropología, antropometría, biotipología, constitucionalista, endocrinología, bioquímica, sociobiología, déficit de vitaminas, hipoglicemia, alergias, ambientalistas, malformaciones cro-

mosómicas); psicológicas (penitenciaría, frenología, psíquica, sistema nervioso autónomo, psicoanalítica, neurofisiología, personalidad criminal, psicodinámico, conductismo, aprendizaje social, desarrollo moral); y sociales (estadística moral, familiares criminales, adopción, sociología criminal, conflictos, subculturales, aprendizaje social, asociación diferencial, neutralización, control social, arraigo social, contención, control interno, etiquetamiento, interaccionismo simbólico).

Pero paralelamente desde el siglo XVIII varios pensadores intentaron determinar las causas de la delincuencia en la combinación de muchos factores interconectados entre sí. Los representantes de esta tendencia, que hoy ha tomado fuerza, fueron: Montesquieu, Voltaire, Brissau, Globig, Guster, Filangieri, Healy, Burt, Tappan, entre otros.

Fidel, el 27 de agosto de 1990, en la inauguración del VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento al delincuente, acontecido en Cuba, explicó “(...) el enfoque del delito como fenómeno en el que intervienen profundas causas sociales (...)”.

## **2- EL ENFRENTAMIENTO A LAS CONDUCTAS DELICTIVAS REQUIERE DE LA PREVENCIÓN, LA REPRESIÓN Y LA REEDUCACIÓN, SIENDO LA PREVENCIÓN LO FUNDAMENTAL.**

En el mencionado evento internacional Fidel argumentó que “(...) nuestro trabajo en la lucha contra el delito descansa en la prevención, en el conocimiento temprano de las actitudes predelictivas, en el esfuerzo concentrado en la solución de dichas actitudes mediante la atención diferenciada de cada caso. Damos prioridad en nuestro sistema penitenciario a la rehabilitación del sancionado, posibilitando su incorporación al trabajo en las mismas condiciones salariales de cualquier otro individuo por un trabajo similar, a fin que pueda ofrecer a su familiar la atención y la ayuda necesaria, y facilitándole posteriormente su reinserción social”.

En el acto conmemorativo del X aniversario de la creación del Ministerio del Interior, en 1971, Fidel Castro afirmó que “(...) la Revolución tiene que prevenir, reprimir y además reeducar.”

## **3- LA EDUCACIÓN ES PRINCIPAL EN LA PREVENCIÓN DE LAS CONDUCTAS DELICTIVAS.**

En otros momentos hemos recalcado que para la prevención de las conductas antisociales, de presencia mundial, se necesita un sistema que integre a todos los factores de la sociedad (órganos, organismos, entidades, ciudadanos, a todos los niveles estructurales de la sociedad), que se dirijan y organicen al efecto de la prevención y el enfrentamiento

de las mencionadas conductas por un órgano coordinador, que además deberá procesar informaciones, valorar situaciones y hacer propuestas con tales fines a los órganos gubernamentales correspondientes, encaminadas a tres direcciones: la prevención, el enfrentamiento – que en nuestro caso puede extenderse a las indisciplinas e ilegalidades – y el seguimiento a los infractores para evitar la reincidencia.

Es evidente el lugar preponderante que ocupa la educación en este sistema. Una de las causas y condiciones que pueden provocar las conductas antisociales son los problemas en la educación, que no es una responsabilidad absoluta de las instituciones educacionales cubanas, sino que incluye en primer lugar a la familia y a todos los sectores de la sociedad, formales y no formales.

Fidel ha insistido en que la educación es el camino esencial para luchar contra las conductas antisociales. En 1971 explicó que además de ser necesario hacer que los ciudadanos respeten las leyes y que mejoren las condiciones socio-económicas, también “será necesario realizar una labor educativa, informativa amplia, a fin de adquirir el máximo de eficacia en la lucha contra el delito (...) en la medida en que la educación avance, progrese, entonces nosotros ya iremos estratégicamente ganando a través de la educación la batalla contra las actividades delictivas y antisociales (...) tenemos otra tarea bastante compleja, bastante ardua, que es la tarea de reeducación del delincuente, de la rehabilitación del delincuente (...) la batalla contra el delito es una batalla de la educación (...)”.

En su discurso en el Congreso

Pedagogía 2003, el 7 de febrero, Fidel fundamentó una “ley social: la relación inversamente proporcional entre conocimiento y cultura y delito”.

¿Y qué entiende Fidel por educación? Nos dice: “(...) la educación – digámoslo con una frase fuerte – es lo que convierte en ser humano al animalito que nace con los instintos naturales que rigen el comportamiento de toda especie viviente (...) sin ella no hay ciencia, ni arte, ni letras; no hay ni habrían hoy producción ni economía, salud ni bienestar, calidad de vida, ni recreación, autoestima, ni reconocimiento social posible (...) Es la educación la que podría vaciar las cárceles donde están aquellos que no recibieron educación (...) La educación es el arma más poderosa que tiene el hombre para crear una ética, para crear una conciencia, para crear un sentido del deber, un sentido de la organización, de la disciplina, de la responsabilidad.”

Fidel, en su discurso en el Congreso Pedagogía 2003, expresó que “la educación no se inicia en las escuelas; se inicia en el instante en que la criatura nace (...)”

En 1979 definió: “Educar es todo, educar es sembrar valores, es desarrollar una ética, una actitud ante la vida. Educar es sembrar sentimientos. Educar es buscar todo lo bueno que pueda estar en el alma de un ser humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas al egoísmo y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo pueden ser contrarrestadas por la conciencia.”

Años antes, en 1971, había expresado: “la batalla contra el delito es una batalla de la educación (...)”.

4- En la prevención y el enfrentamiento de las conductas

antisociales debe intervenir todo el pueblo.

Fidel ha insistido en que “¡la lucha con el delito es, en primer lugar, una tarea de todo el pueblo, una batalla de todo el pueblo! (...) hoy tiene que participar el pueblo, con una buena información, con una actividad consciente, militante, frente a esas manifestaciones. Tiene que participar en esa lucha para prevenir las actividades delictiva y para reprimirlas.”

##### **5- LAS CAUSAS Y CONDICIONES QUE ORIGINAN LAS REFERIDAS CONDUCTAS HAY QUE ENCONTRARLAS EN LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES IMPERANTES EN LA ACTUALIDAD.**

Circunscribiéndonos al campo criminológico, algunos autores cubanos y extranjeros, representantes de la Criminología socialista, resaltaban los vestigios de la sociedad capitalista como causas esenciales de los delitos que se cometían en las sociedades socialistas, denominándose estos fundamentos como “teoría del rezago” o “teoría del pasado”. Ciertamente en todos los países que transitaron al socialismo hubo influencias de las formaciones socio-económicas que les antecedieron que se mantuvieron o se convirtieron por un tiempo en propiciadores de conductas antisociales. Pero dialécticamente, en el transcurso de la construcción de la nueva sociedad socialista, surgieron contradicciones propias de esta etapa que tuvieron efectos similares. Desconocer esta realidad sería un error. Preponderar una causa sobre otras, también es un error. Este tema siempre lleva un análisis integral y multifactorial.

Fidel, contrario a los postulados

de las mencionadas “teorías del rezago”, profundizó en el estudio sobre las causas de la delincuencia en Cuba. Unas de ellas las argumentó en el citado Congreso Pedagogía 2003 planteando: “(...) sin tratar de exponer con más extensión y profundidad este fenómeno, se ha podido ver que los sectores de la población que viven todavía en barrios marginales de nuestras comunidades urbanas, y con menos conocimientos y cultura, son los que, cualquiera que sea su origen étnico, nutre las filas de la gran mayoría de los jóvenes presos (...) mientras otros sectores, con menor índice de conocimientos cuyos hijos suelen asistir por las razones expuestas a centros de estudio, menos demandados y atractivos, estos constituyen el mayor número de los que desertan del estudio en el nivel medio superior, alcanzan un menor número de plazas universitarias y nutre en una proporción mayor las filas de los jóvenes que arriban a las prisiones por los delitos de carácter común. La mayoría de estos últimos adicionalmente proceden de núcleos que se han disuelto y viven con la madre, con el padre, o con ninguno de los dos.”

En esencia, estimo que un sistema de prevención no tendrá los resultados deseados, entre otros motivos, si se aparta de los principios antes expuestos.

##### **BIBLIOGRAFÍA**

Castro Ruz, Fidel: 6 de junio de 1971. Discurso pronunciado por el X aniversario del MININT, en el teatro de la Central de Trabajadores de Cuba.

Castro Ruz, Fidel: discurso pronunciado en el acto de graduación del Destacamento Pedagógico Universitario Manuel Ascunce Do-

menech, Ciudad de La Habana, 13 de julio. Ediciones OR julio-septiembre, La Habana, 1979.

Castro Ruz, Fidel: discurso pronunciado en el primer curso emergente de formación de maestros primeros, el 15 de marzo de 2001. Tabloide especial No. 4, Año 2001.

Castro Ruz, Fidel: 7 de febrero de 2003. Discurso pronunciado en la clausura del Congreso Pedagogía 2003, periódico Granma, La Habana, 8 de febrero de 2003.

Castro Ruz, Fidel: 26 de mayo de 2003. Discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Argentina, periódico Granma, La Habana, 29 de mayo de 2003.

Colectivo de Autores: Teoría de las causas de la criminalidad en la sociedad socialista, revista Divulgación Jurídica, No. 17, 1986, MINJUS.

Lugones Chávez, Oscar: La delincuencia, problemas teóricos y metodológicos, editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1985.

Pablos de Molina García, Antonio: Criminología, una introducción a sus fundamentos teóricos para juristas, 2da. edición, corregida y comentada, Complutense (Madrid), Tiranta lo Blanch, Valencia, 1994.

Vasallo Barrueta, Norma: La Conducta Desviada, un enfoque psicológico para su estudio, editorial “Félix Varela”, La Habana, 2001.

Viera Hernández, Margarita: Temas Fundamentales sobre Criminología, editorial “Félix Varela”, La Habana, 2000.





**Autora: Ana Hernández Mur**

MSc. Problemas Actuales Ciencias Jurídicas, Universidad Valencia  
Especialista Seguridad y Defensa Nacional, Colegio de Defensa Nacional

## SOBRE LA JERARQUÍA DE LOS CONTENIDOS CONSTITUCIONALES DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA UTILIDAD DEL EMPLEO DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD PARA SU DESARROLLO”.

“La Constitución vigente, aprobada en referendo popular en 1976, hace 40 años, y reformada parcialmente en 1992 y en el 2002, responde a circunstancias históricas y condiciones económicas y sociales que han ido cambiando con el decursar del tiempo y la propia implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. El proceso de reforma, que previamente deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional, en correspondencia con sus facultades constituyentes, prevé una amplia participación popular, incluyendo la realización de un referendo constitucional. Esta será una oportunidad para ajustar en nuestra Carta Magna otras cuestiones que requieren de amparo constitucional” (Castro Ruz, 2016).

La afirmación del Presidente de los Consejos de Estado y Ministros es motivación para abordar las garantías constitucionales y legales de la Seguridad Nacional de Cuba, que según la doctrina desarrollada por el Colegio de Defensa Nacional (2011:6), está conceptualizada como “la condición necesaria alcanzada por el país, en correspondencia con su poderío nacional, que le permite prever y acometer acciones, para el logro y preservación de sus intereses y objetivos nacionales,

pese a los riesgos, amenazas y agresiones de carácter interno y externo”.

El escenario después del 17 de diciembre de 2014 con el abierto propósito de los Estados Unidos de mantener los mismos objetivos a través de diferentes formas, corrobora la necesidad del tema en tanto esas garantías permiten al sistema político, cumplir el mandato establecido en la Constitución sobre el carácter irrevocable del sistema socialista y el papel dirigente del Partido Comunista en Cuba, a vista del proceso de actualización del modelo económico, devenido en el enriquecimiento de los intereses y objetivos nacionales.

### 1.1 BREVE APRECIACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

“La doctrina de la Guerra de todo el Pueblo constituye el fundamento estratégico de la defensa del país y define que cada cubano conozca y disponga de un medio, un lugar y una forma de lucha contra el enemigo, bajo la dirección del Partido, en un sistema político-militar y económico único de preparación y realización de la guerra” (Castro Ruz, 2016).

La seguridad nacional entraña una definición conceptual e identifica componentes centrales como la noción del bien a preservar, los medios a utilizar, la definición de

las amenazas y del enemigo. “La idea de un sistema profesional de seguridad nacional, institucionalizado con la más elevada jerarquía normativa, que catalice los esfuerzos de protección de los intereses vitales de la nación” (Rodríguez Medrano, S/A: 27). Que el Estado disponga de una teoría en ese campo, posibilita razonablemente desarrollar, en el orden doctrinal y práctico, acciones que reafirmen su postura en lo interno y en lo externo, porque “la noción de interés nacional es esencial en una estrategia de seguridad nacional” (Enseñat y Berea, 2012: 3 y 4).

Aunque el país no hace pública su estrategia de seguridad nacional, la doctrina que la sustenta, nos coloca frente a la condición de estado de seguro con las valoraciones sobre la invulnerabilidad del país y por consiguiente de la calidad de su seguridad nacional.

Para la Revolución Cubana, asediada por la mayor potencia hegemónica mundial, significa en el orden teórico institucionalizar las concepciones sobre la seguridad nacional, resumen de las experiencias en las diversas dimensiones que la contienen (Garrigó Andreu, 2003: 21). Es decir de una institucionalidad de seguridad, máxime si se tiene en cuenta que como piedra angular de la noción del poder: “En Cuba nunca a nadie se le permitirá soslayar que tal y como expresa la

Constitución en su artículo No. 3, cito: la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado” (Castro Ruz, 2013: 40). Es en la Constitución de un país donde se objetiva jurídicamente la soberanía.

Es correcta la afirmación de la autora Garrigó Andreu (2003: 23), ya citada, acerca de que “el conjunto de acciones que garantizan la preservación de la seguridad nacional, exige normatividad, requiere de una legislación clara y precisa, que legitime el consenso de la sociedad y de la actividad del Estado en cuestiones de seguridad”.

La doctrina permite constatar diferentes puntos de vista respecto a la ubicación y el papel de la seguridad nacional de un país, hay consenso en que “la Seguridad Nacional está referida a las manifestaciones externas, que los sujetos integrantes de la nación pueden percibir, y que se manifiesta en la sensación de tranquilidad o de inseguridad de los ciudadanos, ya que depende de la percepción por parte de la ciudadanía de la sensación de paz, peligro o amenaza para con la nación, y por ende para con la seguridad de sus ciudadanos. La misma es parte inherente de la política de la nación y está directamente vinculada con el Poder Nacional, el cual le proporciona los medios para que se pueda llevar a cabalidad” (Santaella, 2012).

### **1.2 LA RELACIÓN ENTRE LA SEGURIDAD NACIONAL Y LOS CONTENIDOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL**

La “Constitución es un vocablo que la ciencia jurídica toma de la lingüística para denominar al

documento que transcribe las instituciones, conceptos y principios que una sociedad determinada pacta erigir como superiores de su existencia. Dicho documento se convierte en elemento sociológico total de una nación, en vértice del ordenamiento jurídico de un país y en vórtice del poder político”. (Villabella Armengol, 2009: 11)

Dentro de las funciones generales a cumplir una Constitución debe contener un programa de acción, los valores e ideales que primarán conforme a los intereses prevalecientes en la sociedad, una definición del poder y de los límites de su ejercicio, que es pauta y medida para determinar el contenido de leyes y demás disposiciones infra constitucionales.

Las garantías constitucionales y políticas que deben atenderse se encuentran en la doctrina asociadas a dos elementos esenciales: el control de constitucionalidad de la ley y la reforma de la Constitución, con sus particularidades y preeminencias.

Sobre ese aspecto el profesor español Javier Pérez Royo, afirma “las garantías constitucionales son las instituciones a través de las cuales se produce el tránsito de la Constitución exclusivamente política a la Constitución también norma jurídica y del Derecho Político al Derecho Constitucional” (Pérez Royo, 1997: 145).

El tratamiento de las defensas constitucionales en la doctrina es un tema complejo técnica y políticamente, no puede ser reducido a fórmulas dogmáticas, de idéntico rasero en su aplicación para todas las experiencias políticas que existen, “la defensa de la constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que establecen la sujeción a reglas de las Declaraciones

de Excepcionalidad, el procedimiento de Reforma Constitucional y la Justicia Constitucional; sistema de defensa elaborado a partir de las propias definiciones que acerca de la Constitución, el Estado y el Derecho prevalezcan, así como a partir de sus principios y contenidos esenciales del texto constitucional” (Prieto Valdés y Pérez Hernández. 2000: 197).

En tanto centro de la pirámide normativa, la Constitución tiene que serlo también en los planos jurídico-formal y material, es decir, en el espacio funcional donde actúan los sistemas de órganos estatales y de poder que en la sociedad existen. Tal supremacía jerárquica debe ser instituida, fomentada y exigida para que sea realidad. Sabiamente se reitera en la doctrina “sin reforma de la Constitución no hay posibilidad de control de constitucionalidad” (Pérez Royo, 1997: 147). Es este procedimiento especial lo que hace de la carta magna una norma única, en relación con la cual todas las demás pueden ser enjuiciadas.

Es opinión de la autora que suscribe, que todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad nacional deben tener una expresión transversal en la construcción del sistema jurídico del Estado, sobre los pilares del control de constitucionalidad y la reforma, bajo el principio de reserva de ley.

### **1.3 LA TEORÍA DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y SU APLICACIÓN PROBABLE EN LA JERARQUIZACIÓN DE LA SEGURIDAD NACIONAL.**

De la labor de investigación a cargo de especialistas del Colegio de Defensa Nacional, tomamos la afirmación de que “la legislación

cubana no toca el tema de la Seguridad Nacional en todas sus dimensiones, no establece legalmente qué estructuras responden por la previsión, prevención y solución de los problemas de seguridad de carácter internos y externos” (Garrigó Andreu. 2003: 44).

Obvio es que seguridad del país no se limita a la existencia de una ley de seguridad. Además de tener una adecuada expresión en el texto de la Carta Magna, es necesario contar con leyes de rango constitucional que le concedan legitimidad a su desarrollo. Existen distintas variantes para que los mandatos constitucionales, dirigidos al ordenamiento de todos los programas de la sociedad, queden determinados.

Sería útil contar con los criterios de la doctrina constitucional cubana, acerca de lo que la teoría denomina “bloque de constitucionalidad”. En la bibliografía consultada pueden identificarse diferentes tendencias sobre su contenido.

En apreciación del experto Alejandro Ramelli Arteaga (2011), el “bloque de constitucionalidad no es más que una técnica jurídica, presente en las Constituciones abiertas, mediante la cual se amplía el contenido material de la Constitución”.

En su tesis considera el bloque de constitucionalidad en un sentido estricto, conformado por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son principios y reglas de

valor constitucional, normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos.

En tanto que harían parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio aquellas normas que se caracterizan por “(1) ser parámetro para efectuar el control de constitucionalidad del derecho interno; (2) tener un rango normativo superior a las leyes ordinarias (en algunos casos son normas constitucionales propiamente dichas y, en otros casos, ostentan una jerarquía intermedia entre la Constitución y la ley ordinaria); y, (3) formar parte del bloque de constitucionalidad gracias a una remisión expresa efectuada por alguna disposición constitucional” (Ramelli Arteaga, 2011).

A juicio de Edgar Carpio Marcos (S/A: 87) “el concepto de bloque de constitucionalidad comprende a un conjunto de normas y principios de valor formalmente constitucional”, así podrían definirse como leyes complementarias orgánicas, a las ubicadas de forma inmediata debajo de la Constitución. Afirmar que “en su versión procesal, el bloque de constitucionalidad debería integrar, además de aquellas que tienen rango constitucional, aquellas otras fuentes de rango legal que cumplen también la función de limitar el proceso de producción legislativa” (Ibídem: 88).

Explica que la construcción del bloque de constitucionalidad surge para dar respuesta a la existencia de un conjunto de normas de igual rango a la Constitución formal, y la necesidad de dejar sentado que el juicio de constitucionalidad a la ley no puede efectuarse únicamente a partir de la Constitución. Tras el

establecimiento de una pluralidad de órganos con competencias normativas, la Constitución ha delegado en otras fuentes, de inferior jerarquía a ella, la capacidad para establecer, en su nombre, condiciones y límites al proceso de producción legislativa. Tras esta función, “se esconde precisamente el sentido del denominado “bloque de constitucionalidad”, es decir, desarrollar un fin netamente instrumental, consistente en describir el conjunto de fuentes que, sumados a la Constitución, son capaces de actuar como normas paramétricas en el proceso de inconstitucionalidad de las leyes” (Ibídem: 111).

Por su lado, José de Jesús Muñoz Navarro considera que por bloque de constitucionalidad deben entenderse aquellas normas, principios y valores que sin ser parte del texto constitucional (de la constitución en sentido formal) por disposición y mandato de la propia Constitución se integran a ella, con la finalidad de llevar a cabo el control de constitucionalidad (Muñoz Navarro. 2002). Así, cada país va integrando a su ordenamiento jurídico, dependiendo de lo que establezca su propio texto constitucional y lo que van determinando a través de interpretación y precedentes los órganos encargados de interpretar la constitución y llevar a cabo el control constitucional.

La autora Mónica Arango Olaya se refiere a que el bloque de constitucionalidad tiene tres niveles diferentes, que la jurisprudencia ha llamado el bloque en sentido estricto y el bloque en sentido lato. Estos son: las normas de rango constitucional; los parámetros de constitucionalidad de las leyes; y las normas que son



constitucionalmente relevantes en un caso específico.

A su criterio, el bloque en sentido estricto está compuesto por: el preámbulo de la Constitución; la Constitución; los tratados limítrofes de derecho internacional ratificados; la ley estatutaria que regula los estados de excepción; los tratados de Derecho Internacional Humanitario; los tratados de derecho internacional que reconocen derechos intangibles; los artículos de los tratados de derecho internacional de derechos humanos ratificados, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta; y la doctrina elaborada por los tribunales internacionales u órganos de control de los tratados de derechos humanos en relación con esas normas internacionales restrictivamente y sólo en determinados casos. Y en sentido lato, como parámetro de constitucionalidad de las leyes, está compuesto por las leyes orgánicas; y las leyes estatutarias en lo pertinente (Arango Olaya. 2004: 24).

El académico Rodrigo Uprimny considera dos sentidos al concepto del bloque de constitucionalidad: uno al conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de excepción; otro según el cual estarían todas aquellas normas, de diversa jerarquía, que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación; conforme a esta última acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado de la Constitución sino, entre otros,

por los tratados internacionales ratificados, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias.

Según la tesis de este estudio: no obstante el creciente uso de éste término, el concepto de “bloque de constitucionalidad es problemático en la doctrina y jurisprudencia”, (Uprimny, Rodrigo. S/A: 1) porque “es necesario tener en cuenta que las constituciones no son códigos totalmente cerrados, ya que los textos constitucionales pueden hacer remisiones, expresas o tácitas, a otras reglas y principios, que sin estar en la constitución, tienen relevancia en la práctica constitucional en la medida en que la propia constitución establece que esas otras normas tienen una suerte de valor constitucional” (Ibídem: 3).

Deben conocerse los riesgos y beneficios de esta teoría en términos de seguridad jurídica, es posible que los operadores del Derecho no tengan suficientemente claro cuáles son las normas a tener como referentes para asumir un necesario debate constitucional, en las condiciones de Cuba, que realiza importantes transformaciones dirigidas a garantizar el sistema socialista como legado para las futuras generaciones.

Profundizar en el bloque de constitucionalidad, posibilitaría enriquecer los debates acerca de la justicia constitucional del país, ante el hecho que una Constitución puede tener mayor densidad y extensión normativa, de lo que sugiere la lectura de su articulado.

Debe tenerse en cuenta que “la preservación de la Seguridad Nacional requiere la ejecución de un conjunto de acciones en todas las esferas de la sociedad, de forma tal que el estado a alcanzar por

el país, se exprese en la garantía de que se encuentre organizado y preparado para responder a los desafíos políticos, económicos, ideológicos, militares, culturales, científico tecnológicos, medioambientales entre otros, en interés del desarrollo sostenible y la defensa del país y se impida la reversibilidad del proceso revolucionario”. (Peña Ojeda. 2011: 10)

Es en este sentido donde la concepción acerca del bloque de constitucionalidad adquiere importancia y actualidad, que para el contexto cubano pueden ser tenidas en cuenta como “leyes constitucionales”. La Seguridad Nacional de Cuba, como competencia esencial y responsabilidad del Estado, debe contar con una adecuada concepción integradora que posibilite reconocerla en el texto constitucional y en el conjunto de las disposiciones legales concebidas en el bloque de constitucionalidad, que permita alcanzar la invulnerabilidad del proceso revolucionario y por tanto haga irreversible el socialismo.

Tomando en cuenta los elementos expuestos podría aproximarse una propuesta de definición del contenido de las garantías constitucionales y legales de la Seguridad Nacional de Cuba, como “la expresa referencia en el texto constitucional de su concepto y de su carácter multidimensional, con la remisión a las leyes constitucionales, que permitan disponer de una base legal e institucional para la solución de las cuestiones relativas a la previsión, prevención y solución de los riesgos, amenazas y agresiones de carácter interno y externo”.

#### BIBLIOGRAFÍA:

Arango Olaya, Mónica. 2004. “El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la corte

constitucional colombiana". Precedente, Anuario Jurídico, Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, Universidad Icesi, Cali, Colombia. Disponible en: <http://www.icesi.edu.co>. Consulta 3 de abril de 2013.

Carpio Marcos, Edgar. S/A. "Bloque de constitucionalidad y proceso de inconstitucionalidad de las leyes" Disponible en: [http://www.iidpc.org/revistas/4/pdf/93\\_128.pdf](http://www.iidpc.org/revistas/4/pdf/93_128.pdf) . Consulta 2 de abril 2013.

Castro Ruz, Raúl. 24 de febrero de 2013. Discurso pronunciado en la Sesión de Constitución de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Revista Bohemia 8 de marzo de 2013, Año 105, No. 5.

Castro Ruz, Raúl. 2016. Informe Central al Séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba. Tomado de Cubadebate.

CODEN, 11 de julio 2011. "Fundamentos de la Seguridad Nacional". Octava versión. La Habana, Cuba.

Enseñat y Berea, Amador F. 2012. "A qué responden las estrategias de seguridad nacional (DIEEE031-2012)". Instituto Español de Estudios Estratégicos. Disponible en <http://www.ieee.es/galerias/docsopinion/2012/EstrategiasSegl>. Consulta 12 enero 2013.

Garrigó Andreu, Lidia. 2003. "La seguridad en el mundo actual. Un enfoque cubano acerca de su Seguridad Nacional". Trabajo de Investigación Científica, Colegio de Defensa Nacional CODEN.

Muñoz Navarro, José de Jesús. Mayo 2002. "El Bloque de Constitucionalidad como parámetro del control constitucional en México" En Debate Social 23, No. 3, Iteso. Disponible en: <http://www.debate.iteso.mx/NÚMERO23/...pdf>. Consulta 3 de abril de 2013.

Peña Ojeda, Yamila. 2011. "El Control de la Legalidad como Garantía de la Seguridad Jurídica" Trabajo Final XVII Especialidad en Seguridad y Defensa Nacional, Colegio de Defensa Nacional, CODEN.

Pérez Royo, Javier. 1997. "Curso de Derecho Constitucional". Cuarta edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, España.

Prieto Valdés, Martha y Lissette Pérez Hernández. 2000. "El control de la constitucionalidad de las leyes y otros actos. Sus formas en Estados Unidos y Cuba". Selección Temas de Derecho Constitucional Cubano. Facultad de Derecho. Universidad de La Habana. Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba.

Ramelli Arteaga, Alejandro. Noviembre 2011. "Aspectos

controversiales del bloque de constitucionalidad en Colombia" En Ámbito Jurídico, Rio Grande, XIV, No. 94. Disponible en: [http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n\\_link=revista\\_artigos\\_leitura&artigo\\_id=10614](http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10614). Consulta 2 de abril de 2013.

Rodríguez Medrano, Raúl. S/A. "El sistema de seguridad nacional y los objetivos nacionales permanentes tutelados por la Constitución Política Mexicana". En Debate Social No. 23. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx>, consulta 3 de abril de 2013.

Santaella, Carla. 2012. "Seguridad y Defensa Nacional". Universidad Rómulo Gallegos, Departamento de Derecho Público. Disponible en: <http://www.monografias.com>. Consulta 3 de abril de 2013.

Uprimny, Rodrigo. S/A. "El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal". Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Disponible en: <http://www.dejusticia.org>. Consulta 3 de abril de 2013.

Villabella Armengol, Carlos Manuel. 2009. "Historia Constitucional y Poder Político en Cuba". Editorial Ácana, Camagüey, Cuba.





**Autor: MsC. Enrique Núñez Grillo**

Fiscal. Dirección de Cooperación Jurídica y Relaciones Internacionales Fiscalía General de la República  
Profesor Auxiliar Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana

“UNA NECESIDAD INAPLAZABLE. LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL FRENTE AL NARCOTRÁFICO Y OTROS DELITOS INTERNACIONALES”.

**R**esulta incuestionable en estos tiempos, la importancia de la cooperación jurídica para la prevención y represión de los delitos y sus consecuencias en los planos nacional e internacional, pues la mayor parte de la delincuencia nacional o interna de los países, es el semillero para el desarrollo de la delincuencia internacional y más aún, cuando la criminalidad interna logra la formación de redes eficientes, constituyendo un importante soporte para las actividades delictivas internacionales organizadas.

Por otra parte, la tecnificación, el desarrollo de las comunicaciones y modernización de las organizaciones delictivas hace notoria la ineficiencia de los órganos responsables de la ejecución de la ley en la mayoría de los países, por lo que todos, evidentemente, tienen necesidad de cooperación de asistencia de mayor o menor grado para hacer frente a estos problemas a escala nacional y con mayor razón, a escala internacional.

En los Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, se han planteado con fuerza y reiteradamente, cuestiones respecto a la colaboración internacional en este rubro, con base en las consultas oficiosas, que han marcado nuevos enfoques y nuevas estrategias

para el combate a la delincuencia transnacional, las que podríamos tratar de resumir en los siguientes términos:

Se ha invitado a los gobiernos para que reafirmaran su compromiso respecto al cumplimiento de los tratados internacionales existentes y con respecto a los principios expresados en la Carta de las Naciones Unidas y todos los instrumentos internacionales consecuentes, de manera que sirviera ese cumplimiento como una eficaz medida de prevención del delito.

En este orden de ideas, el respeto al derecho y al principio de legalidad en las relaciones internacionales debe estar presente en toda medida en la lucha contra la delincuencia internacional. Para la difusión de estos principios, se debe estimular el estudio del Derecho Penal Internacional y hacerse permanente cotejo de la legislación interna y los acuerdos internacionales.

Se debe combatir la delincuencia internacional en forma legalmente planificada y con el apoyo de personal especialmente capacitado, buscando adecuar la legislación no sólo penal, sino civil y administrativa vigente, a las nuevas y sofisticadas formas delictivas.

Sobre este punto, se reitera una llamada especial para la lucha contra la creciente contaminación, la explotación irracional y la con-

secuente destrucción del medio ambiente, utilizándose no sólo el derecho civil y administrativo, sino el penal para detener esta alarmante devastación, proponiéndose el estudio de los que serían los principios rectores para la prevención de los delitos en contra del medio ambiente.

En razón del uso abusivo de las tecnologías avanzadas y los conocimientos técnicos especializados en el comercio internacional, como fraudes por computadora, abuso de los servicios bancarios, lavado de capitales, Corrupción, Tráfico de Personas, manipulación de disposiciones fiscales y aduanales, se hace inaplazable la capacitación adecuada de los funcionarios encargados de la represión de estos delitos, requiriéndose además la cooperación de otros organismos competentes a nivel interno e internacional.

Se reitera a los gobiernos que deben formular la normatividad necesaria para controlar y sancionar la participación de las empresas, organizaciones y asociaciones ilícitas, en actividades delictivas que afecten las economías nacionales.

Debe además estimularse el intercambio de leyes y reglamentos relacionados con las nuevas manifestaciones de la delincuencia internacional para que algunos países conozcan las diversas op-



ciones que se están utilizando en otros, facilitándole la selección de medidas adecuadas.

Se debe dar especial atención al combate contra la corrupción de funcionarios, servidores y empleados públicos que pueden destruir la eficacia potencial de los programas gubernamentales, por lo que resulta indispensable que los países revisen cuidadosamente su legislación penal y procesal para que responda adecuadamente a todas las formas de corrupción muy sofisticadas que estas sean y actos conexos orientados a facilitarla.

Se requiere también la formulación de mecanismos administrativos y reglamentarios para la prevención de estas prácticas y del abuso de poder, adoptando procedimientos ágiles para la detección, investigación y sanción de los funcionarios corruptos organizando legalmente el decomiso o la confiscación de los fondos obtenidos mediante prácticas corruptas y se busque la forma legal para sancionar a las empresas involucradas en este género de actividades.

Otro aspecto que demanda la más intensa colaboración internacional es el relativo al Narcotráfico y se debe buscar proporcionar orientación y apoyo a los países que sufren sus actividades, buscando la armonización de las leyes y los procedimientos internacionales, la extradición, la asistencia recíproca en la justicia penal y el intercambio de estos delitos transfronterizos cualquiera que sea su naturaleza.

Una cuestión fundamental en la lucha contra la delincuencia es la preparación y cumplimiento de políticas educacionales apropiadas en los sistemas formales y en programas generales para evitar la victimización delictiva y familiarizar a la población con los

objetivos y procedimientos de la justicia penal.

Tampoco debe descuidarse el apoyo a las víctimas del delito y del abuso de poder, para lo cual se ha indicado con reiteración, que las Naciones Unidas ha preparado y actualizará una reseña de medidas amplias para la adecuación sobre la prevención de victimización y la protección, asistencia e indemnización de las víctimas que será adaptable a las circunstancias específicas de cada país.

Es reconocido que la función decisiva que tiene el sistema de justicia penal en cuanto a la prevención del delito, se ha de tener el convencimiento de que debe actuar sobre la base de una progresiva racionalización y humanización de las leyes y los procedimientos penales en el marco general de la justicia y las aspiraciones sociales.

Este aspecto resulta necesario profundizarlo, ya que parece ser que las reacciones emotivas contra el delito generan una penalización inalcanzable por el ser humano y carente de sentido en el estricto cumplimiento de la readaptación social, con lo cual pretenden justificar las brutalidades carcelarias con el concepto de que “al cabo son criminales”, lo que lleva a un bárbaro retroceso en cuanto al manejo de los delincuentes en los niveles de investigación, procedimiento, sentencia y ejecución de ésta. De manera increíble, son los criterios que privan aún altos niveles educativos, como podríamos suponer que deben tener los jueces y magistrados, aunque también se debe mencionar que afortunadamente los hay que sí entienden la finalidad de todo el sistema penal en cuanto a prevención y tratamiento del delincuente.

Otro aspecto que se considera indispensable para manejar la prevención del delito se refiere a la planificación que debe contemplarse dentro de la planificación general de las actividades del país, debiendo enfocarse primero a una reevaluación general de las leyes penales sustantivas y procesales en los casos apropiados. Este enfoque comprendería la introducción de los procesos de eliminación de figuras delictivas, despenalización y sustracción de casos a la legislación penal, así como reformas a los procedimientos que merecieran el apoyo de la población, con miras a evaluar su repercusión. También consistiría en el establecimiento de vínculos apropiados entre el sistema de justicia penal y otros sectores del desarrollo, incluidos la educación, el empleo, la salud, las políticas sociales y otros.

Así se debe buscar un enlace efectivo entre las realidades culturales y los valores sociales vigentes y el procedimiento penal, para que éste resulte aceptado y comprensible para la comunidad que lo utiliza, garantizándose durante todo el procedimiento la igualdad, la equidad, la coherencia y el respeto a los derechos humanos.

La naturaleza y características de la cooperación y asistencia serán variables, en razón de las variantes que el delito impone a los diferentes países, por las peculiaridades económicas, sociales, políticas y culturales de éstos.

En realidad, para mejorar la eficacia de la comparación internacional en esta materia, es decir, en cuanto a la prevención del delito y la justicia penal, se deben realizar esfuerzos concertados tendientes a:

1. Ratificar y aplicar los instrumentos internacionales

existentes;

2. Desarrollar instrumentos bilaterales y multilaterales y

3. Preparar y elaborar instrumentos y normas modelos para ser utilizadas en los planos nacional, bilateral, multilateral, regional e interregional.

La formulación para propuesta de estos instrumentos, normas y reglas internacionales, deberán en principio enfocar puntos concretos ya detectados como importantes, como serían aquellos cuyos modelos se han presentado y discutidos con profundidad en los Congresos de Naciones Unidas, con referencia a temas tales como:

a) tratados de asistencia judicial, en particular entre países que apliquen el derecho anglosajón y de tradición romanística, que traten de los medios necesarios para obtener pruebas de conformidad con los requerimientos del Estado que haga la petición;

b) elaboración de solicitudes de normas para casos de extradición y asistencia recíproca;

c) desarrollo de los medios necesarios para prestar asistencia a las víctimas del delito y del abuso de poder, haciendo hincapié en la aplicación de la declaración sobre los principios fundamentales para las víctimas del delito y los abusos de poder y de los que tienden a buscar protección adecuada a los testigos;

d) formulación de normas para la asistencia internacional con respecto al secreto bancario, facilitando la incautación y el decomiso de los importes depositados en cuentas bancarias que procedan de actos delictivos.

Correspondería también desarrollar normas internacionales más eficaces para prevenir el blanqueo o lavado de dinero y las inversiones relacionadas con

actividades delictivas como el Tráfico Internacional de Drogas y el Terrorismo.

También es necesario la adopción de medidas más eficaces y concretas para el fortalecimiento de los programas de cooperación internacional técnica y científica en la materia, sean bilaterales o multilaterales, considerándolos como parte de programas de desarrollo más amplios, contemplando en estos las necesidades de los países en desarrollo, en particular su situación socioeconómica, que en muchos de ellos está empeorando, lo que contribuye al aumento de la desigualdad social y con ello al incremento de la delincuencia.

No significa esto que sólo en los países económicamente atrasados o con problemas socioeconómicos se esté incrementando la actividad criminal, sino por el contrario, es en los países de mayor desarrollo económico industrial y cultural donde se han generado los nuevos tipos de delitos que ocasionan daños económicos sorprendentemente mayores que los que ocasiona toda la delincuencia tradicional junta.

Las delegaciones de los países participantes en los Congresos, generalmente están integrados por funcionarios de alto rango, participantes directos de las formulaciones político-criminales en sus países, por lo que estas reuniones dan una oportunidad única para que, empapados de los planteamientos de Naciones Unidas, hagan sus proposiciones dentro del marco de las resoluciones de la ONU, al regresar a sus países. Además, en estos congresos se reúnen los representantes gubernamentales con los de las organizaciones profesionales de la materia, los de los institutos de investigación y los expertos; se

facilita un fructífero intercambio de conocimientos especializados y experiencias en relación con las iniciativas de política penal, legislativa penal, criminalística y de otras cuestiones relacionadas.

Hay que destacar los importantes logros que han obtenido los Congresos, además de la interacción que se refiere anteriormente y son una cantidad de acuerdos y resoluciones que pueden conjuntarse ya en un cuerpo de derecho internacional en la esfera de la prevención del delito y la justicia penal.

También se debe reconocer que las funciones y responsabilidades de estos Congresos, fundamentalmente en la impartición de orientaciones normativas generales en relación con el delito y la justicia penal, para los cinco años siguientes a su celebración, han excedido sus posibilidades reales, ya que el número de resoluciones de prioridad, la falta de recursos y la ausencia de un sistema estructurado de metas y prioridades, ha hecho imposible cumplir con la amplitud y eficacia deseadas.

El Comité de las Naciones Unidas de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, está integrado por profesionales de la Justicia Penal y es una dependencia permanente del Consejo Económico y Social, con carácter normativo en la esfera de su competencia, pero además es el responsable de la preparación de los Congresos Quinquenales.

Este Comité se reúne cada dos años por espacio de ocho días, lo que resulta insuficiente para debatir y plantear los asuntos de planificación y supervisión de políticas, que algunos Estados solicitan para verificar el eficaz cumplimiento de los acuerdos o bien la revisión de la ejecución

para comprobar el avance de las experiencias correspondientes.

En realidad la semana de sesiones no permite desahogar las cuestiones relacionadas con la preparación del siguiente Congreso, lo que produce una frustración en sus integrantes ante la imposibilidad de mover a las Naciones Unidas para que se les proporcionen los elementos y recursos necesarios para el desarrollo de un programa en el ámbito del delito y la Justicia Penal acorde con los requerimientos de una sociedad tremendamente compleja como la actual. En 1988 se constituyó un subcomité que es un cuerpo de apoyo que vino a respaldar al Comité en la asistencia a los Estados miembros.

La subdivisión de prevención del Delito y Justicia Penal de la secretaría es una dependencia que tiene como funciones la realización y coordinación de las actividades de las Naciones Unidas en la materia de referencia, para lo que cuenta con los servicios de varios profesionales de alto nivel y capacidad, aunque pocos para el enorme trabajo que enfrenten.

La limitación de los recursos se opone a la responsabilidad de planificar y coordinar el programa de prevención del delito y Justicia Penal, otorgando la asistencia vigente que los países miembros (en especial aquellos en desarrollo) solicitan, pero su presupuesto, su plantilla de personal y su nivel orgánico son totalmente insuficientes.

Las funciones más importantes de la subdivisión son:

1. dar orientación a los Estados miembros sobre las estrategias de Prevención del Delito y la formulación de las políticas penales;
2. asistir a los Estados miembros para la integración de

las resoluciones o la adecuación de las directorías de Naciones Unidas en la materia, incluyendo aspectos especiales de prevención delictiva, a sus planes nacionales de desarrollo;

3. elaborar y promover las normas internacionales en materia preventiva y justicia penal, supervisando su aplicación;

4. intervenir y coordinar las actividades, cooperación técnica, capacitación en materia de justicia penal e investigación del área;

5. elaborar modelos de acción internacional conjunta contra el delito internacional;

6. coordinar las actividades de la materia entre todas las dependencias de las Naciones Unidas y sus Institutos;

7. concebir y llevar a cabo encuestas y estudios mundiales sobre tendencias del delito, estrategias para su prevención y represión y en general estudios a fondo sobre cuestiones especiales;

8. preparar, recopilar y difundir la información de las Naciones Unidas en la materia.

Existen varios institutos de las Naciones Unidas, tanto propios como afiliados a esta: el Instituto regional con sede en Tokio (UNAFEI), el interregional con sede en Roma (UNICRI) y los institutos regionales de San José (ILANUD), Helsinki (HEUNI) y Kampela (UNAFRI).

Existen además otros dos institutos de cooperación, uno en Riad (el Centro Árabe de capacitación y estudios en materia de seguridad) y otro en Camberra (Instituto australiano de Criminología).

El financiamiento de las actividades de estos institutos está fundamentalmente a cargo de los gobiernos de los países sede, con alguna ayuda externa. Estos Institutos tienen funciones muy

amplias y variables, desde la promoción de las reformas jurídicas hasta la formación de jueces y fiscales. También se encuentran en desventaja en cuanto a la demanda de sus servicios, en especial los solicitados por muchos países en desarrollo y las capacidades tutoriales para cumplimentar dicha demanda, lo que trae como resultado que en ocasiones se ven en la necesidad de no apoyar plenamente las prioridades programáticas de las Naciones Unidas, asignando sus fondos a proyectos específicos de la región.

Por ejemplo, la situación económica de ILANUD, que tiene que rechazar solicitudes de orientación y apoyo para la prevención y lucha contra delito de muchos países de la región latinoamericana y caribeña, por su imposibilidad material de atenderlo, relacionando aquellos de mayor urgencia en su criterio y retrasando indefinidamente los menos apremiantes.

De lo expuesto anteriormente se hace patente que el programa general de las Naciones Unidas para la prevención del delito se hace insuficiente y se ha reducido en ocasiones a la presentación periódica de informes, la práctica de análisis y publicación de sus resultados que de cualquier forma constituyen un estímulo para mantener y renovar normas y proporcionan información y sugerencias novedosas a sus miembros.

Se plantea que además del apoyo para la capacitación del personal del área de justicia y el asesoramiento permanente dentro de los programas específicos de prevención, se debe estar en posibilidad de otorgar asistencia especial en casos necesarios para asuntos concretos, además de promover una evaluación permanente de estos programas y el análisis y



reformulación de criterios jurídicos y procedimientos tradicionales, sin descartar la introducción de los cambios necesarios.

En los Congresos de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, se citan como prioritarias, las medidas necesarias para prevenir y combatir graves delitos internacionales y delitos, que aún sin serlo, son reiterados de efectos graves para los países como:

1. Delincuencia organizada, incluyendo fraudes y estafas a gran escala, corrupción, Lavado de Activos y drogas;
2. Terrorismo;
3. Delitos contra el medio ambiente;
4. Delitos graves contra la propiedad;
5. Delitos violentos, incluida la violencia en las calles y la violencia en el hogar;
6. Delincuencia juvenil.

En cuanto a medidas encaminadas a mejorar el cumplimiento de las leyes y el funcionamiento de la

justicia penal, hay que atender:

1. La función policial, dirección, capacitación, estructura, responsabilidad y relaciones con la comunidad;
2. La función del Ministerio Público en materia Penal.
3. La posición de los jueces y sus relaciones con las demás partes del sistema penal;
4. El funcionamiento de las sanciones penales y la forma de obtener efectos preventivos;
5. Los problemas de la administración de prisiones, sobre población, tratamiento, Tráfico de Drogas y VIH SIDA;
6. La cooperación y Asistencia Judicial internacional en la materia;
7. La atención a las víctimas de los delitos.

Claro está que los temas prioritarios son organizaciones internacionales que se dedican al estudio del delito, de sus causas y a la búsqueda de medidas adecuadas para reprimirlo, para prevenirlo y para notificar sus nefastas

consecuencias. Existen muchas y muy importantes organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional y Penitenciaria, la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Sociedad Internacional de Criminología, la Sociedad Internacional para la Defensa Social, la Asociación Internacional de Magistrados, la Sociedad para la Reforma del Derecho Penal, la Sociedad Mundial de Victimología, sólo para mencionar las de mayor envergadura y algunas de ellas colaboran de manera permanente con la Organización de las Naciones Unidas y su participación neutral resulta de gran valía para el conocimiento, denuncia y a veces remedio de muchas de las irregularidades y violaciones a los derechos humanos que se verifican en diversos países.

La cooperación internacional es un elemento decisivo para poder avanzar en el conocimiento del fenómeno delictivo y de su evolución en un mundo sometido a agudas contradicciones, presiones enormes y profundos cambios.





LA FASE INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL”.

**Autora: Prof. Aux. Mayor Liliana Malena Díaz Campa**

Especialista de Postgrado en Derecho Penal. Primera Profesora de la Cátedra de Derecho Penal

Escuela Militar Superior “Cmdte. Arides Estévez Sánchez”, Orden “Antonio Maceo.”

Juez suplente no permanente del Tribunal Militar Territorial Occidental.

## 1. INTRODUCCIÓN

**H**istóricamente la estructura del proceso penal solo ha reconocido dos fases, una de instrucción y otra de enjuiciamiento o de juicio oral. El reconocimiento de un procedimiento o fase intermedia entre ambas, ha sido muy cuestionado por la doctrina científica. Sobre el tema se han suscitado otras polémicas en el ámbito académico referentes a su finalidad, autonomía, el sujeto procesal responsable, sus límites, extensión así como concretos actos.

Pero en el desarrollo actual del derecho se apuesta por un proceso penal constituido por tres fases claramente diferenciadas, preparatoria, intermedia y de juicio oral. La fase intermedia gana reconocimiento y se erige como momento procesal idóneo para subsanar los vicios en los actos procesales penales y eliminar impedimentos procesales, contribuyendo “a racionalizar la administración de justicia”.

## 2. DESARROLLO

Los detractores del reconocimiento de la fase intermedia como una etapa procesal autónoma le objetan que solo existe una apariencia pedagógica (Gimeno Sendra. 2001: 169) o metodológica de este período, la naturaleza bi-

fronte de sus actos (Fenech. 1952: 42), la imposibilidad de definir sus propios y peculiares límites (Aguilera de Paz. 1924: 491), así como su escaso reconocimiento legal.

En esta fase se analizará todo lo actuado, para concluir y decidir sobre el resultado de la investigación penal. Por ello, el sujeto procesal que asume un papel preponderante es el Ministerio Público, a quien le corresponde analizar la investigación realizada por el investigador para determinar si son precisas nuevas diligencias probatorias, si corresponde el sobreseimiento del imputado o bien si están dados los presupuestos para abrir la etapa plenaria o definitiva. En este sistema, la defensa carece de la facultad para manifestarse sobre el mérito de la investigación preparatoria y sólo puede invocar hechos que paralizan temporalmente el procedimiento mediante un acto de oposición a la apertura del juicio. Sus desventajas radican en un limitado acceso a la justicia de los sujetos procesales, un escaso papel defensivo así como la subsanación de impedimentos procesales en un momento tardío.

## 3. LA FASE INTERMEDIA SEGÚN LA DOCTRINA CONTEMPORÁNEA.

Más cercano a nuestros días, Roxin, Maier y Binder por solo citar

algunos ejemplos, identifican al período intermedio. Para el primero (Roxin. 2000: 347), es en el que se produce la “decisión judicial sobre la apertura del procedimiento principal”. Mientras Maier (1977) apunta “cuyo fin está constituido por el control jurisdiccional de los actos del ministerio público que culminan la instrucción jurisdiccional valorando sus resultados”. Estos conceptos, nos adelantan que es un momento del proceso que sirve de enlace entre las etapas de investigación y de juicio oral donde el órgano jurisdiccional analiza los resultados de esa primera etapa, pero aún, no nos revelan su contenido. Según el profesor Binder (1993: 225) constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación (...) pero no agota su función en el control formal (...) sirve para realizar un control, sustancial sobre esos actos conclusivos (...).

Ello nos permite dilucidar su especial finalidad, controlar jurisdiccionalmente los actos conclusivos de la investigación del Ministerio Público, ya que le corresponde al Tribunal evaluar el requerimiento de apertura del juicio y examinar la presencia de todos los presupuestos formales y materiales para someter al

acusado al proceso, a la vez que define la calidad de la investigación y el cumplimiento de las garantías establecidas. Además esta fase le brinda la posibilidad al acusado de influir sobre la decisión de apertura del juicio, a través de solicitudes de prueba y planteamientos de excepciones u objeciones.

El ejercicio de la acción penal (del Ministerio Público o del querellante) constituye el presupuesto necesario para su inicio. En este período intervienen el órgano jurisdiccional y las partes, pero coincidiendo con Baumann (1986:53) el ministerio público está más impulsado hacia un rol de parte y es el juez el señor de esos predios.

Las solicitudes e incidencias que se planteen en esta etapa del procedimiento, deben ser resueltas por el juez profesional del tribunal quien luego presidirá la audiencia principal del juicio, (en el caso de Alemania) o por aquel que ha estado a cargo del control de la investigación en la etapa precedente, el juez de garantía (Chile). En el primero de los casos se cuestiona que compromete la imparcialidad del juez, mientras que en el segundo, se le critica que tiene que reevaluar la legalidad de las actuaciones realizadas durante la etapa de investigación que él mismo debió controlar, por lo que se considera como alternativa óptima que se realice por un juez o un tribunal del procedimiento intermedio.

Una vez presentada la acusación, el tribunal o juez de garantía debe realizar las siguientes actuaciones: ordenar la notificación de la acusación a todos los intervinientes colocando a su disposición las actuaciones, se le posibilita a la defensa señalar mediante

escrito los vicios formales de que adolezca el escrito de acusación, invocar excepciones de previo y especial pronunciamiento, peticionar el sobreseimiento del proceso, instar la suspensión condicional del procedimiento, pedir anticipos de prueba, aprobar convenciones probatorias, ofrecer las pruebas que estimen necesarias, señalar los medios de prueba que considere omitidos o que se excluyan alguno de los ofrecidos por los intervinientes, entre otras. Dentro de esta etapa también se definirán las cuestiones relativas a la constitución de partes civiles y del querellante.

En el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, durante esta etapa o fase del proceso se ha instrumentado una audiencia preliminar o de preparación del juicio oral, como un trámite procesal que propicia el cumplimiento efectivo de sus especiales objetivos. Esta audiencia se concreta a través de la reunión de los tres sujetos esenciales del proceso (el tribunal y las partes) y se le atribuyen cuatro funciones principales: conciliadora, saneadora, abreviadora y ordenadora. Como parte de su función saneadora, tiene por genuina función “purgar” el proceso de obstáculos procedimentales, a través de un mecanismo concentrado, posibilitando que el objeto procesal ingrese a la fase probatoria y decisoria purificado y exento de irregularidades; sin perjuicio de que se adosen otras actividades (como el intento conciliatorio, la determinación de los hechos y de las pruebas).

La audiencia preliminar, necesaria u optativa, se desarrolla ante un tribunal o juez distinto al que deba resolver el conflicto, en un escenario de oralidad, con la

participación de las partes quienes tienen franqueada la posibilidad de plantear una serie de peticiones que deben resolverse por el Juez en correspondencia con lo interesado. A través de este trámite procesal se le permite al órgano judicial subsanar vicios, corregir errores u omisiones en sus actos particulares y solucionar cuestiones previas que afecten el proceso en general, impidiendo que tales imperfecciones alcancen la fase del juicio oral y afecten el correcto desenvolvimiento del proceso y su celeridad. Binder (1993: 231) expresaba “... el carácter poco contradictorio de la instrucción se corrige con este debate preliminar, de modo que las garantías procesales, la posibilidad de defensa, el principio de inocencia, no cumplan su función solo en el juicio, sino que extiendan su poder benéfico a lo largo de todo el proceso penal, resguardando el valor intangible de la persona humana”.

Las ventajas de este modelo procesal están dadas por una mayor participación del órgano judicial para lograr una apertura a juicio oral fundada, se le brindan al acusado y su defensor mayores posibilidades para influir sobre el procedimiento, una delimitación más precisa del objeto del proceso, una eficaz y oportuna depuración del proceso y de los actos concretos, así como un marco propicio para soluciones alternativas de la justicia penal.

#### 4. EN EL ÁMBITO NACIONAL

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1882, que se hizo extensiva a Cuba y comenzó a regir a partir del primero de enero de 1989 no se estableció la fase intermedia del proceso penal. Los



actos que metodológicamente a ella corresponden se encuentran dispersos entre los capítulos referidos a la conclusión del sumario y la apertura a juicio oral. Las leyes procesales penales que posteriormente han regido en nuestro país no han podido alejarse de esta influencia, lo que coadyuvó a que en las actuales normativas procedimentales 5 y 6 de 1977 la fase intermedia esté “totalmente desdibujada” (Rivero García. 2012: 90).

Según la sistemática de la Ley de Procedimiento Penal 5 de 1977, el fiscal realiza un control sobre la investigación llevada a cabo por el instructor una vez que este le remite las actuaciones por considerarlas concluidas. Si observare que es imprescindible realizar alguna diligencia que resultare esencial podrá practicarla directamente o bien devolverle el expediente al instructor para que la practique. En caso contrario, de estimarlo completo se encuentra facultado para decretar alguna medida cautelar o pronunciarse sobre las impuestas, sobreseer con carácter provisional el proceso, presentar el expediente al tribunal instando el sobreseimiento libre, solicitar al tribunal la tramitación de alguno de los artículos de previo y especial pronunciamiento o interesar la apertura del juicio oral formulando para ello la acusación mediante las conclusiones provisionales.

Para un sector de la doctrina cubana representado por Prieto Morales (1982: 66), Candia Ferreyra (2002: 167) y Mendoza Díaz, estos actos integran lo que metodológicamente consideran la fase intermedia. Todos estos autores coinciden en señalar como su punto de inicio la remisión de las actuaciones al fiscal para su análisis y como el sujeto responsable

de dicho período al fiscal, lo que se corresponde con la regulación de la LECrim española y las normas cubanas precedentes. La sentencia número cinco mil trescientos diecinueve de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular de 14 de diciembre de 2005 suscribe esta postura cuando plantea en uno de sus considerandos “que del examen de las actuaciones se advierte que tanto el instructor policial durante la fase de averiguación, como el fiscal durante la fase intermedia o de imputación, se apartaron de determinar la evolución y posterior curso de las lesiones que en su día recibió el ciudadano EOA, (...)”.

El profesor Mendoza Díaz (2001) haciendo una distinción entre diligencias previas y fase intermedia plantea “las actividades previas (...) no pueden estar contenidas dentro de la llamada etapa intermedia, pues con este calificativo se identifican todas aquellas diligencias que realiza el fiscal una vez concluida la investigación y antes de presentar sus conclusiones acusatorias. La etapa intermedia está totalmente a cargo del Ministerio Público y es previa al asiento del sumario en sede jurisdiccional, mientras que la denominada actividades previas se desarrollan plenamente en sede judicial.”

Nuestra postura se inclina a considerar que los actos realizados por el fiscal están encaminados a valorar si están dados los presupuestos que le permitan ejercitar la acción penal o en su defecto sobreseer el proceso en cumplimiento de sus funciones de gestor de la acción penal pública y garante de la legalidad en todas las fases del proceso. Coincidiendo con los procesalistas Arranz Castillero (2002: 212) y Rivero Gar-

cía (2012: 90) la fase intermedia se ubica en sede judicial y concluye –como regla– al disponerse la apertura del juicio oral.

La excepción de este acto conclusivo lo constituye la tramitación de los artículos de previo y especial pronunciamiento, los cuales pueden ser alegados por el fiscal en el trámite de calificación y por el acusado dentro del plazo concedido para evacuar conclusiones provisionales. Evidentemente, su solución constituye un mecanismo para subsanar los vicios en las actuaciones que conforman el proceso y para la eliminación de impedimentos procesales. Tomando como punto de referencia a Gimeno Sendra (2001: 350), consideramos a los artículos de previo pronunciamiento o cuestiones previas son auténticos presupuestos procesales, que han de ser resueltos, con carácter previo al juicio oral, en una audiencia preliminar a fin de poder obtener la concentración del juicio oral, eliminando a limine tales obstáculos procesales. Siendo digno de destacar que tal potencialidad no se observa en la Ley procesal penal militar 7 de 1977, la cual no brinda un cauce para ello una vez que se ha formulado la acusación.

Otra de las posibilidades para la depuración de los actos concretos imperfectos lo constituye la posibilidad que se le brinda al tribunal de devolver las actuaciones cuando detecte que se ha quebrantado en la tramitación de la fase preparatoria algunas de las formalidades de procedimiento (LPP) la violación sustancial de la Ley Procesal Penal Militar que prive o restrinja los derechos de los participant-es en el proceso u otras infracciones procesales que puedan influir negativamente sobre la objetividad de la práctica de las pruebas durante el juicio oral y

sobre la deliberación y fundamentación de la sentencia (en el caso de la LPPM). En ambos procesos, ordinario o militar, dicho quebrantamiento está dado por el incumplimiento de algunos de los requisitos previstos por el legislador para la realización de las acciones y diligencias de instrucción, (que debe ser esencial y causa de nulidad). En el auto o resolución en el cual el tribunal plasme su decisión de devolver las actuaciones a la fase preparatoria deberá indicar los preceptos infringidos, así como las investigaciones y diligencias que deban practicarse. Las desventajas de este saneamiento radican en que el tribunal debe advertir por sí mismo los vicios así como que participan los mismos jueces que con posterioridad integrarán el tribunal de la fase del juicio oral lo que compromete su imparcialidad.

Resulta interesante que en el caso de la normativa procedimental militar tal decisión solo podrá adoptarse luego de que el fiscal plantee su punto de vista ante el tribunal en una vista oral, denominada sesión dispositiva. La sesión dispositiva se acerca a la audiencia preliminar analizada anteriormente, pero adolece de la participación del acusado y su defensor así como del perjudicado, sin que exista oportunidad para que éstos sean escuchados con posibilidades para expresar las irregularidades durante la sustanciación del expediente.

A partir de lo anterior formulamos las siguientes conclusiones:

El reconocimiento de un procedimiento o fase intermedia ha sido

muy cuestionado por la doctrina científica. Actualmente se erige como momento procesal idóneo para subsanar los vicios en los actos procesales penales y eliminar impedimentos procesales.

Constituye una necesidad del perfeccionamiento del proceso penal cubano el reconocimiento legal de la fase intermedia y su proyección como vía para el saneamiento de los vicios en los actos procesales, a partir de las ventajas que representa para un mejor desenvolvimiento de la justicia y la economía procesal.

### BIBLIOGRAFÍA

Aguilera de Paz, Enrique. 1924. "Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Editorial Reus, Madrid, España.

Arranz Castellero, Vicente. 2002. "El juicio oral: sus principios y las normas fundamentales que lo regulan en la legislación penal cubana". En Temas para el estudio del derecho procesal penal. Segunda parte. Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba. p.212 y ss.

Baumann, Jurgen. 1986. "Derecho procesal penal, conceptos fundamentales y principios procesales". Traducción de la tercera edición alemana. Ediciones Depalma.

Binder, Alberto M. 1993. "Introducción al Derecho procesal penal". Primera edición. Editorial ad hoc.

Boletín del Tribunal Supremo Popular de 2005.

Candia Ferreyra, José. 2002. "La fase intermedia del proceso penal" En Colectivo de Autores, "Temas para el estudio del derecho procesal penal" Segunda parte. Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba.

Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones. Madrid. 1990.

Fenech, Miguel. 1952. "Derecho procesal penal". Tomo I, Editorial Labor, Barcelona, España.

Gimeno Sendra, Vicente. "Los actos judiciales de imputación" en Gimeno Sendra, Vicente; Moreno Catena, Víctor y Cortés Domínguez, Valentín. 2001. "Lecciones de Derecho Procesal Penal" Editorial Colex.

Maier, Julio B.J. 1977. "La reforma del sistema penal en Costa Rica". Doctrina Penal, año 1, período julio-diciembre.

Mendoza Díaz. 2001. "Lecciones de Derecho Procesal Penal". Universidad "Juan Misael Saracho". Tarija, Bolivia.

Prieto Morales, Aldo. 1982. "Derecho procesal penal". Tomo 1. Editorial ENSPES, La Habana, Cuba.

Rivero García, Danilo. 2012. "Pasado, presente y futuro del derecho procesal penal en Cuba". Panorama del derecho procesal hispanocubano. Editorial Tirant lo Blanch.

Roxin, Claus. 2000. "Derecho procesal penal". Traducción a la edición alemana No. 25. Editores del Puerto, Buenos Aires, Argentina.





APUNTES PARA UNA ADECUADA APRECIACIÓN  
DEL ERROR”.

**Autora: Prof. Aux. Dunia Martínez Cruzata**

Especialista de Postgrado en Derecho Penal

Primera Profesora de la Cátedra de Derecho Penal. Escuela Militar Superior “Cmdte.

Arides Estévez Sánchez”, Orden “Antonio Maceo.”

Juez suplente no permanente del Tribunal Militar Territorial Occidental.

## 1. INTRODUCCIÓN

**E**l estudio del error en la dogmática penal es un tema controversial, el cual ha sobrevivido la diversidad de criterios a partir de las diferentes posiciones filosóficas y sistémicas que lo han abordado, sin embargo hoy es incuestionable, su transcendencia para la justicia penal. Así mismo, aunque no se considera un tema acabado, hay resultados que se consideran válidos teniendo en cuenta su importancia a efectos teóricos y prácticos.

El peso del principio “ignorantia legis non excusat” ha dificultado, en la esfera de la culpabilidad, el desarrollo de la moderna teoría del error de prohibición. Su ubicación sistemática y fronteras con otras instituciones cobran especial vigencia en nuestro contexto socio-jurídico, teniendo en cuenta la influencia del positivismo jurídico en el estudio y concepción del delito.

## 2. CONOCIMIENTO DE LA ANTIJURIDICIDAD Y DE LA LEY

El problema fundamental que dificulta la admisión del error de prohibición parte de la confusión que se ha generado entre el presunto conocimiento de la ley y la conciencia de la antijuridicidad. El principio “la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”

constituye una regla necesaria para la validez general del ordenamiento jurídico. Esta es una cuestión de pura obligatoriedad abstracta de la ley, pero no asimilable al problema de la culpabilidad del sujeto por un hecho concreto. Aquella se refiere al fundamento de validez de la ley; esta a la propia existencia del delito en condiciones concretas, al cual deben aplicarse leyes vigentes.

Afirmar que las leyes, una vez aprobadas y publicadas, adquieren validez formal o vigencia, con independencia de ser conocidas en concreto, es una verdad correcta, pero nada tiene que ver con el problema del conocimiento de la antijuridicidad. De ahí que se han formulado argumentos para refutar la validez de este principio en la teoría de la culpabilidad. El extraordinario volumen y variedad de leyes, acarrear la imposibilidad de un real conocimiento de la ley, lo contrario es una ficción jurídica.

En otro sentido, establecerlo como deber, solo puede serlo en la medida que sea exigible, y demandar de toda la sociedad un conocimiento de las disposiciones penales representa un objetivo de proporciones tan desmesuradas, que resulta incompatible con el propio concepto del deber. Del mismo modo, si existiera una obligación de conocer la ley penal, debería también existir una sanción especial para el caso de su inobservancia, lo

que no ocurre en la realidad de la vida jurídica.

Estas críticas condujeron a dos soluciones: primera, entender que la presunción de conocimiento de la ley es una presunción iuris tantum, que podía quedar desvirtuada por la buena fe del que actúa; y segunda, afirmar que el principio “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”, debe ser excluido de la esfera del error de prohibición.

Esta última salida es la más adecuada, ya que ofrece la solución a la confusión inicial; en la medida en que el conocimiento de la ley dejó de identificarse con el conocimiento de la antijuridicidad, la ignorancia de la ley y error de prohibición dejaron de ser conceptos equivalentes.

La antijuridicidad de una acción es la relación de contradicción que se establece entre ese hecho y el sistema jurídico. La eventual antijuridicidad del hecho no está en el hecho en sí ni tampoco en las leyes, sino en la contradicción que se establece entre el hecho concreto, real, y el ordenamiento jurídico. En materia penal solo es adecuado hablar de conciencia de la antijuridicidad respecto a un injusto concreto; a un hecho penalmente típico y antijurídico.

La actual clasificación de error de tipo y error de prohibición llegó por el camino que se abandonó al demostrarse lo confuso que resul-



taba, para la justicia, la separación de error de hecho y error de derecho. Tras la aparición de los elementos normativos, la propuesta del finalismo respecto al dolo en la tipicidad y la conciencia de la antijuricidad como nuevo elemento en la culpabilidad, tuvo su fin la clasificación de error de hecho y de derecho.

La nueva clasificación aparece consecuente con la posición del finalismo o, por lo menos, con la de todos aquellos que distinguen entre el dolo (natural) en la tipicidad, referido al aspecto objetivo de ella y, por tanto, relacionado con un error sobre ese aspecto objetivo. La conciencia de la antijuricidad, situada como aspecto de la culpabilidad, vinculada con el injusto, aparece correspondida con un error sobre el injusto del comportamiento.

### 3. DELIMITACIÓN ENTRE ERROR DE TIPO Y DE PROHIBICIÓN

El establecimiento de las fronteras entre el error de tipo y error de prohibición es objeto de una gran polémica en la doctrina, y conforme a ello, las soluciones pueden agruparse en dos posiciones: las teorías del dolo y las teorías de la culpabilidad.

Ambas teorías varían en sus consecuencias ya que su diferencia radical estriba en la posición sistemática que se le otorgue al dolo y a la conciencia de la antijuricidad, de las que el error de tipo y de prohibición son sus respectivas fases negativas. Quienes entienden que el dolo, como *dolus malus*, es contentivo de la conciencia de la antijuricidad afirman que tanto el error de tipo como el que recae sobre la ilicitud anulan el dolo. Esta postura se corresponde con las coordenadas sistemáticas del clasicismo y neoclasicismo.

En otra opinión los que entienden que la conciencia de la antijuricidad es un elemento de la culpabilidad distinto del dolo, afirman que el error de tipo afecta al dolo y consigo la tipicidad, consecuentemente un error sobre el carácter ilícito del hecho será un error de prohibición que afecta la culpabilidad pero nunca el dolo, entendido ahora como dolo neutro.

En la sede de las teorías del dolo pueden diferenciarse entre la teoría estricta y la teoría limitada del dolo. Para la primera el dolo comprende tanto el conocimiento actual de los elementos objetivos del tipo, como el conocimiento actual de la antijuricidad, y ambos afectan el aspecto cognitivo del dolo, y conducen a las mismas consecuencias jurídicas. El error, sea de tipo o de prohibición, si es invencible elimina el dolo y la imprudencia, por tanto eximen de responsabilidad criminal. Lo mismo sucede si es vencible y no hay tipo imprudente. En cambio, si es vencible y la conducta imprudente es típica, el autor responderá por este delito.

Esta solución resulta insegura porque iguala el conocimiento de la tipicidad con el de la antijuricidad. El conocimiento requerido por el dolo, es actual y está referido a la realización misma. En cambio, para el conocimiento de la antijuricidad, lo fundamental es la exigencia de una determinada conciencia al sujeto conteste a sus capacidades concretas al actuar. Esto trasciende en la solución, ya que no se puede equiparar la culpa respecto al tipo, con la culpa respecto a la ilicitud, es decir, infracción del deber de cuidado no en el actuar sino en el conocimiento de la prohibición.

El error de prohibición tiene que idearse de modo diferente en el de-

lito culposo, pues ineludiblemente tiene que admitirse que su presupuesto es sólo la posibilidad de conocimiento; si no fuese así, el error de prohibición no sería permisible en la culpa, al no ser necesaria la representación del hecho, bastaría la falta del cuidado exigido.

La teoría limitada del dolo trata de reducir los problemas de la posición anterior, de ahí que se encuentra en la necesidad aceptar que en el dolo habrá dos momentos cognitivos diferentes, uno referido tipicidad de carácter actual y otro dirigido a la antijuricidad de carácter inactual, sólo la posibilidad. Aquí se salvan las contradicciones anteriores, logrando iguales resultados; el error evitable de prohibición lleve a la culpa sobre la ilicitud.

Conforme a esta tesis nace una postura que ha cobrado auge en parte de la doctrina, que habla de una doble posición del dolo; en el injusto y en la culpabilidad. Fundada por Gallas (Bernd Schünemann. 1991: 15), según esta, el dolo es elemento del tipo del injusto, pero asimismo de la culpabilidad. En ella se trata de fundamentar la solución de que, en el error sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación, se excluye el dolo, pero no el dolo típico, sino de culpabilidad dolosa. En el fondo, se ha dado la razón al finalismo; estos casos de error no constituyen un problema de tipo de injusto, sino la culpabilidad.

La teoría de la culpabilidad también se separa en una teoría estricta y una limitada. Para la primera el dolo sistemáticamente está en la tipicidad y es un dolo natural. La conciencia del injusto, es un conocimiento potencial, y un problema de culpabilidad. Conforme a esta teoría, el error de prohibición invencible excluye la culpabilidad, no el dolo

ni la culpa, pues el injusto permanece intacto y el error vencible sólo atenúa la culpabilidad, tanto en el injusto doloso o como en el culposo. Esta teoría estima que el error sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación constituye un error de prohibición.

Es válido señalar que se produce una confusión entre los presupuestos objetivos de una causa de justificación, que pertenecen al hecho, con una cuestión valorativa que es la creencia del sujeto de que su comportamiento no está prohibido por el derecho. Se confunde el injusto de hecho con las valoraciones sobre el mismo.

La teoría limitada de la culpabilidad parte de las coordenadas de que la conciencia de la antijuricidad es un problema de culpabilidad, pero se aparta de la teoría estricta en la solución del error sobre los presupuestos materiales de las causas de justificación. Existen posiciones como la teoría de los elementos negativos del tipo y la que remite a las consecuencias jurídicas que llegan a la misma la misma solución que esta; dar al error sobre los presupuestos de las causas de justificación el mismo tratamiento error de tipo.

De las posiciones analizadas, las teorías de la culpabilidad son las que dan resultados satisfactorios, en consonancia con una sistemática coherente con la separación del conocimiento en el dolo que se encuentra en el tipo y el conocimiento de la antijuricidad que se ubica en la culpabilidad. Al reconocerse que las estructuras son diferentes el tratamiento también requiere serlo. La teoría limitada resulta la más coherente en cuanto a la concepción del delito como sistema, que el conocimiento de la antijuricidad tenga carácter potencial, y que cuando se

trate de error sobre los presupuestos fácticos o materiales de las causas de justificación, se excluya del error de prohibición.

#### 4. ERROR DE TIPO PERMISIVO

Las causas de justificación se componen por elementos objetivos y subjetivos. Los primeros comprenden los presupuestos fácticos de las causas de justificación (realidad de la agresión, necesidad objetiva de defensa, etcétera), que se dan objetivamente y se corroboran en el hecho.

El elemento subjetivo significa que tiene que existir conocimiento, por parte del sujeto, de que se encuentra en una situación justificante. Aunque un sector doctrinal influenciado por el casualismo naturalista, considera imposible observar aspectos subjetivos en las causas de justificación por el carácter objetivo de la antijuricidad, esta posición es rechazable de plano. Esto significaría, que no sería necesario que una persona supiera que está siendo objeto de una agresión ilegítima y que actuara sin ánimo de defensa, para que se le pudiera eximir de responsabilidad criminal si lesionara a otro.

La cuestión del error de tipo permisivo supone en lo esencial una inversión de la situación de los elementos subjetivos de justificación. El sujeto que actúa en error de tipo permisivo se representa una situación justificante que en realidad no se da. El conocimiento exigible para con los presupuestos objetivos de la causa de justificación tiene que ser actual; si la justificación se refiere al acto y se constata en el hecho, solo es posible requerir un conocimiento en el momento de la situación.

Para determinar si el error de

tipo permisivo se considera error de tipo o error de prohibición, se han desarrollado varias teorías para su solución. Las teorías del dolo, ya sea estricta o limitada, de las cuales expusimos los argumentos por los que deben ser rechazadas, se corresponden con el pensamiento del causalismo. Las teorías de la culpabilidad se pueden agrupar en: las que consideran no excluir nunca el dolo, sino únicamente la culpabilidad; las que entienden que se excluye el dolo; y las de equiparar las consecuencias jurídicas del hecho doloso a un delito imprudente.

La teoría que considera que se excluye únicamente la culpabilidad se identifica con la teoría estricta de la culpabilidad. Desarrollada por el finalismo, la suposición errónea de circunstancias justificantes se trata como un error de prohibición que no excluye el dolo, sino la culpabilidad en caso de ser invencible; si el error es vencible, la pena del delito doloso puede atenuarse.

En esta idea hay una confusión, porque los finalistas también reconocen elementos subjetivos en la antijuricidad. Si el conocimiento es parte del contenido de la antijuricidad su aspecto negativo tiene que ser considerado también en la antijuricidad. No hay razones para trasladar tal conocimiento y su aspecto negativo a la culpabilidad. Si le sumamos que la conciencia de la antijuricidad es potencial y en las causas de justificación el conocimiento es actual, se estaría en el mismo error criticado al sistema clásico, que mezcla un conocimiento actual para el hecho y uno potencial en la antijuricidad. Como consecuencia se extendería en forma ilimitada el alcance de las permisiones.

Las otras teorías que consideran que se excluye el dolo son la teoría

de los elementos negativos del tipo y la teoría restringida o limitada de la culpabilidad. La primera es rechazable como concepción bipartita del delito en la que se funden tipo y antijuricidad, con el riesgo de anular los cometidos de ambas categorías, tanto a efectos sistemáticos como político criminales.

La segunda teoría, arriba al mismo resultado, empleando las reglas del error de tipo al error de tipo permisivo, pero por analogía. Según esta, un error que oculta al sujeto el carácter prohibido de su conducta es un problema de atenuación o exclusión de su culpabilidad, que no afecta al dolo, a menos que concierna a una circunstancia del hecho, como es el caso de los presupuestos de las causas de justificación; no se afecta el dolo típico pero sí el injusto doloso.

La teoría de la culpabilidad que remite a las consecuencias jurídicas no atribuye el efecto excluyente del dolo al error de tipo permisivo, pero lo intenta en virtud de la culpabilidad disminuida, al equiparar en sus consecuencias jurídicas el hecho, en su opinión doloso, a un delito imprudente. La teoría de la culpabilidad dependiente refiere que sólo cuando sea punible la comisión imprudente debe tener lugar una condena por delito doloso, reduciéndose el marco penal del delito doloso al marco del delito imprudente.

Por último, la teoría de la culpabilidad independiente en cuanto a las consecuencias jurídicas, aprecia un delito doloso, y construye un marco penal propio para el caso de vencibilidad del error. Aquí se permite sancionar aunque la ley no castigue la actuación imprudente: la solución sería atenuar la pena conforme a determinadas reglas.

Considera la autora que la teoría

restringida de la culpabilidad es la más adecuada para la solución al error sobre las causas de justificación, al tratarlo de forma analógica conforme al error de tipo excluyente del dolo. Este razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en estructuras diferentes, no niega el cometido autónomo de cada una y permiten dar soluciones satisfactorias porque ambos errores se dan en el ámbito situacional y se refieren al hecho, afectan los componentes subjetivos de ambos elementos (tipo y antijuricidad), en ambos casos se requiere un conocimiento actual respecto al objeto de conocimiento y no potencial. Además quien se guía por representaciones que se dirigen a algo jurídicamente permitido, actúa igual que cuando supone circunstancias que justificarían el hecho, pues su finalidad es plenamente compatible con las normas del Derecho. Hay actuación dolosa cuando se decide por una conducta que está prohibida por el ordenamiento jurídico aún cuando no se conozca la prohibición, pero sí produce el resultado indeseado por falta de atención y cuidado, es aplicable el reproche por imprudencia. En el error sobre los presupuestos materiales de una causa de justificación sucede lo mismo cuando el error es vencible, y en consecuencia hay que imputar un delito imprudente. Finalmente en un supuesto de hecho justificante se actúa de un modo exactamente igual de intachable que quien no quiere realizar ningún tipo; la situación supuesta anula los impulsos de prevención y de inhibición que se desprenden normalmente del tipo.

## 5. ERROR DE PROHIBICIÓN

El error de prohibición versa sobre la existencia misma de la pro-

hibición, el conocimiento erróneo se refiere al injusto en específico, de la prohibición o mandato propiamente dicho. La conciencia errónea sobre la ilicitud del obrar puede referirse también a otras valoraciones fundamentales para la determinación del injusto, esto es, a los permisos como causas de justificación. La creencia recae sobre el permiso en sí, al creerse que existe una causa de justificación que en realidad no existe en el ordenamiento jurídico, este se denomina error de permisión o sobre la existencia de una causa de justificación.

Este error solo tendrá eficacia eximente en la medida que sea invencible, esto es cuando el sujeto no tiene la posibilidad de acceder al conocimiento del injusto. De ello se deriva que en el error de prohibición la culpabilidad consiste en la posibilidad de acceder al conocimiento del injusto, y no en la infracción misma. La suposición de un deber especial de informarse conduce a la errónea conclusión de que su infracción fundamenta la vencibilidad del error de prohibición. Así, si el sujeto omite de manera contraria al deber informarse como le era exigible, ha provocado así culpablemente el error de prohibición, siendo indiferente qué información habría obtenido. Esto es incorrecto y supone una vulneración del principio de culpabilidad.

En el supuesto de el error fuera vencible por darse la posibilidad de conocimiento, y a pesar de ello el sujeto actúa entonces subsiste la culpabilidad. Sin embargo esta se presenta disminuida, ya que en verdad se actúa sin el conocimiento, pero al existir la posibilidad de acceder al mismo, deja en pie la culpabilidad pero reducida. Por tanto la opinión dominante en casos de error de prohibición vencible es de reducir



o disminuir la pena como consecuencia de una menor culpabilidad.

En la Ley 62 no existe reconocimiento expreso del error sobre la existencia de la prohibición. Los artículos 23 y 24 regulan, el error de tipo y el error sobre los presupuestos fácticos de las causas de justificación. Sin embargo, somos de la opinión, que es posible encontrar la existencia del error de prohibición en el Código penal cubano.

Al realizar un análisis del Artículo 9.2, respecto lo que abarca el componente cognitivo del dolo, este se refiere a que "...el agente realiza consciente y voluntariamente la acción u omisión socialmente peligrosa...". Aquí la peligrosidad social es la cualidad que distingue a la acción u omisión de otras que quedan fuera del terreno de lo delictivo. Se refiere entonces a la conciencia de la antijuricidad material (Quirós Pérez. 2005: 336), que consideramos es el objeto de conocimiento dentro de la culpabilidad. Por tanto si faltase dicho conocimiento por qué no ha existido conciencia de la peligrosidad social de la acción, entonces nos enfrentamos al error de prohibición.

El carácter de este conocimiento se no puede deducir de la letra del artículo 9.2., pero el hecho de que no se reconozca una institución que hable de la ausencia del conocimiento de la antijuricidad, es un vestigio de la ficción que significa que este conocimiento se actual.

Para que resulte satisfactoria la interpretación, a pesar de que

como se ha ratificado, el conocimiento de la antijuricidad no debe ser abarcado por el dolo, el Código penal cubano parece entenderlo así, en correspondencia con las teorías del dolo en cuanto se extiende a la conciencia de la ilicitud, esto como *dolus malus* característico del sistema clásico. Sólo será posible otorgarle eficacia eximente a la ausencia de conocimiento de la antijuricidad, como excluyente del dolo del artículo 9.2, si a este conocimiento se le otorga el carácter de potencial, como la posibilidad de conocimiento. En nuestros predios Quirós Pérez (2005: 336), habla de la afiliación a la teoría estricta del dolo que iguala el conocimiento del tipo con el conocimiento de la antijuricidad; en ambos casos considera debe ser actual. La solución inmediata en los hechos que se presente debe guiarse por el contenido de la peligrosidad social como fundamento material del delito a partir del desvalor de la acción y del resultado según las formas, los medios, las circunstancias, la reprochabilidad interna y de la significación histórica, jurídica y social del bien jurídico (Yan Vera. S/A: 39).

## 6. CONCLUSIONES

La distinción entre conocimiento de la ley y conocimiento de la antijuricidad es el punto de partida fundamental para ofrecer un tratamiento justo y adecuado al error de prohibición. El primero se refiere a una exigencia general para la validez formal de toda ley y el segundo a la relación

de contradicción que se establece entre un hecho y el sistema jurídico; la conciencia de la antijuricidad es respecto a un injusto concreto, es decir, a un hecho penalmente típico y antijurídico. El error de tipo, sobre las causas de justificación y de prohibición tienen diferentes naturalezas; el primero afecta la tipicidad, el segundo la antijuricidad y el último la culpabilidad. El los dos primeros la solución analógica conduce a un tratamiento semejante, excluir la responsabilidad penal en caso de invencibilidad y castigar por el delito imprudente cuando fuera vencible el error. El error de prohibición es inherente a la culpabilidad y sus efectos versan sobre la exclusión de la responsabilidad penal en la variante invencible y atenuar la pena en caso ser evitable. En nuestro contexto jurídico la peligrosidad social como elemento material del delito constituye el objeto del conocimiento de la atijuricidad sobre la cual versa el error de prohibición.

## BIBLIOGRAFÍA

Bernd Schünemann. 1991. "El sistema moderno del Derecho penal: Cuestiones fundamentales", Editorial Tecnos S.A., Madrid, España.

Quirós Pérez, Renén. 2005. "Manual de Derecho penal". Tomo III Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba.

Yan Vera Toste. S/A. "El fundamento de la esencia del concepto de delito". Revista Justicia y Derecho, No. 12, año 7.



## LA PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE FISCALES JEFES MUNICIPALES”.

EL DIPLOMADO EN DIRECCIÓN  
Y SU IMPACTO EN EL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN.

**Autora: Dra. C. Magda Luisa Arias Rivera**

Cuando el Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana recibió la solicitud de diseñar un Diplomado en Dirección para Fiscales Jefes Municipales, inició una historia de colaboración con la Fiscalía General de la República que se extiende por casi un lustro y ya cuenta con cuatro ediciones terminadas, 109 fiscales graduados y el premio al Resultado de investigación más valioso a la Educación Superior en el curso 2015-2016 de la universidad.

Para elaborar el programa del diplomado se tomó en consideración todo lo establecido en el Sistema de Trabajo con los Cuadros y sus Reservas, el Reglamento de la Educación de Postgrado del Ministerio de Educación Superior, así como los resultados del trabajo y las necesidades específicas de la FGR. Fue necesario además, considerar el funcionamiento de las fiscalías municipales, las mejoras proyectadas, su estructura y composición, las funciones asignadas a los Fiscales Jefes Municipales por la Ley No. 83 de 1997 y su Reglamento.

En este empeño fue de gran utilidad la experiencia acumulada por el CETED durante casi 30 años de trabajo en la Preparación y Superación de los Cuadros y sus Reservas. Se cuidó al proyectar los cursos y las actividades que apoyaran los objetivos institucionales y desarrollaran el potencial de los participantes de forma

integral y multifacética sobre la base del aprendizaje individual, en equipo y organizacional.

Con el empleo de una metodología pedagógica mixta que combina diferentes modelos de estímulo-respuesta, el diplomado ofrece una visión sistémica del proceso de dirección. La propia concepción del programa privilegia la actividad, el análisis de casos concretos, la solución de problemas específicos y el intercambio de experiencias. Emplea demostraciones, ejemplos, simulaciones, dramatizaciones, estudio de casos, entrenamiento en el trabajo de dirección, talleres integradores, lectura, videos y video conferencias, discusión en grupos y discusión reiterada, entre otros métodos de enseñanza-aprendizaje. Eso permite la construcción conjunta del conocimiento y la movilización de la experiencia para aprender entre todos.

El diplomado ocupa 1244 horas totales, de las cuales, 460 son presenciales y 784 corresponden a trabajo independiente. Algo novedoso de este programa es dedicar el 15% de su fondo de tiempo al entrenamiento en el puesto de trabajo, 19% a la investigación, 15% a las especialidades, 21% a las funciones generales y 23% a las habilidades directivas. Otro aspecto novedoso es incluir visitas a instituciones de interés cultural, histórico, productivo o de servicios y conferencias especializadas.

Los contenidos se agrupan en

tres módulos que incluyen: Funcionamiento interno, Funciones generales de la dirección; y Habilidades directivas.

Hasta el momento se han realizado cuatro ediciones. Las experiencias acumuladas en su ejecución, la retroalimentación ofrecida por los participantes y las transformaciones de la FGR y el país han permitido ajustar el diseño de cada nueva edición.

El claustro de profesores es amplio e incluye académicos, funcionarios de alto nivel de los ministerios y órganos de relación, los Fiscales Directores de las funciones sustantivas de la FGR, así como funcionarios de entidades empresariales y gubernamentales. El CETED coordina el programa donde participan las facultades de Derecho, Comunicación y Psicología de la Universidad de La Habana, los Centros de Estudios de Dirección de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, de la Universidad de Oriente, y de la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba “Nico López”.

Si se revisa su corta pero intensa historia, se comprueba que las dos primeras ediciones se realizaron sólo en La Habana, con una matrícula total de 36 Fiscales Jefes y reservas provenientes de todo el país. Los resultados alcanzados, la necesidad de ampliar la cantidad de participantes, acortar los plazos y evitar grandes desplazamientos, incidieron en que se decidiera crear dos nuevas sedes

a partir del año 2015 en Villa Clara y Santiago de Cuba.

En estos momentos permanecen activos 100 de los 109 graduados. El 65% (71) de la matrícula fueron mujeres lo cual es coherente con la estructura por sexo de la plantilla de personal. La tercera parte de los egresados son jóvenes entre 24 y 34 años con una experiencia de trabajo promedio es de 9,5 años y en el cargo de 2,6 años.

Debe destacarse que todos los matriculados en el diplomado lo han concluido satisfactoriamente, con altos resultados académicos. Fue posible alcanzar el nivel descrito por la alta motivación de los participantes y por la prioridad, apoyo y creación de condiciones materiales –que incluye medios audiovisuales producidos por y para el programa- tecnológicas -conectividad y condiciones para desarrollar las actividades docentes e investigativas- y de vida que aseguran el proceso de formación.

En todas las ediciones se listan y se tienen en cuenta las expectativas de los participantes quienes manifiestan compromiso con la realización exitosa del Diplomado, expresado en la disposición a aportar conocimientos y experiencias personales y del territorio, a adquirir nuevos conocimientos y habilidades, empeño, esfuerzo, atención, interés, disciplina, sinceridad, dedicación, interacción, tiempo, ideas y soluciones.

Prevalece el interés por investigar sobre los procesos penales, las verificaciones fiscales, la protección de los derechos ciudadanos, entre otros temas importantes. En el ámbito de la dirección, trabajan en temas poco investigados como la dirección eficaz del trabajo en las fiscalías municipales, la mo-

tivación, la gestión del personal y la aplicación de la Política de Cuadros, entre otros.

Al finalizar cada módulo se realiza una retroalimentación para conocer las percepciones sobre la calidad de las actividades docentes que culminan siempre con un taller donde se discute colectivamente cómo aplicarlo aprendido. La mayor parte de las valoraciones recibidas son positivas, lo cual no excluye sugerencias de incorporar algunos elementos económicos, lograr un uso más balanceado de los métodos activos por todos los profesores y mejorar la forma de evaluar.

Para todos resulta interesante y satisfactorio el entrenamiento. El mismo tiene lugar durante una semana en una fiscalía de otro municipio. Por su concepción permite desplegar las competencias esenciales, demostrar habilidades, conocer nuevas experiencias y realizar propuestas de mejora. Concluye con la presentación de un plan de acción al Fiscal Jefe municipal y al Fiscal Jefe de Cuadros provincial. Después, durante el taller integrador, se socializan las experiencias, se valoran los resultados y analizan las propuestas colectivamente. La participación activa de representantes de las direcciones de la FGR garantiza el seguimiento de la instrumentación de las soluciones propuestas y apoya las acciones consecuentes.

Próximo a la fecha de terminación crece la tensión debido al rigor de la elaboración del trabajo final. Los temas responden a las necesidades de los municipios, las provincias y las direcciones centrales que cada año se revisan y actualizan.

El trabajo final es asesorado por dos profesores que coordinadamente facilitan y orientan

la investigación. Ese esfuerzo consolida las competencias teóricas, metodológicas y de diseño aplicadas a la investigación, para con sus resultados contribuir al perfeccionamiento del orden institucional, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la disciplina y la elevación de la calidad del servicio judicial en sentido general.

Al concluir cada módulo se evalúa la reacción, es decir, la satisfacción con el programa a partir del logro de los objetivos previstos y la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. También se evalúa el aprendizaje y la posibilidad de la aplicación inmediata de los conocimientos y el desarrollo de habilidades para asumir el trabajo. Para llegar más lejos, es necesario identificar la influencia del diplomado en el desempeño individual. Ver en qué medida amplía, desarrolla y perfecciona las competencias profesionales como fiscales y como cuadros la repetición o ejercitación de lo aprendido, si perciben el apoyo institucional y de sus superiores para hacer, si eran observables el esfuerzo personal sistemático y la autosuperación, y en qué medida las evaluaciones del desempeño lo reflejaban convenientemente.

Los graduados ratifican a través de encuestas anónimas que el Diplomado en Dirección es útil para el ejercicio de las funciones al frente de las fiscalías municipales y que influye de forma considerable en su desempeño. De igual forma valoran el aporte a la transformación favorable del clima laboral a partir de un más efectivo trabajo en equipo, mejores relaciones con los subordinados, mayor aprovechamiento de la jornada laboral, priorizar

las tareas, así como planificar, organizar y controlar de manera más efectiva.

Una de las tareas más complejas en la cual se continúa trabajando es en medir el impacto del diplomado. Cabe resaltar el valor comunicacional de las publicaciones del sitio institucional (<http://www.fgr.cu>) donde se reseña el Diplomado en Dirección con una incidencia positiva en la percepción de los públicos internos y externos. Otras vías utilizadas para divulgar los resultados del diplomado son los eventos científicos

nacionales e internacionales y la publicación de las investigaciones en revistas especializadas.

Un grupo de graduados del diplomado ha demostrado competencia y acumulado los méritos necesarios para ser promovidos. Ellos sienten que van desarrollando su carrera profesional y que se valora lo que hacen.

Todo lo compartido hasta aquí satisface los objetivos estratégicos de la entidad, los conocimientos, habilidades y comportamientos adquiridos son aplicados en la práctica y repercuten positiva-

mente en la cultura de trabajo y el alineamiento sistémico porque aborda las temáticas y problemas prioritarios de la institución.

La experiencia de colaboración entre la FGR y el CETED puede considerarse ejemplar. Todo lo planificado se cumple con precisión y calidad. Los análisis y resultados existentes reconocen que el Diplomado en Dirección es una inversión sostenible en conocimiento que asegura el funcionamiento futuro y permite contar con los cuadros preparados para enfrentar los nuevos retos.



**Autora: Lic. Odidza Nodas Rodríguez**

Fiscal del Departamento de Protección a la Familia y Asuntos Jurisdiccionales  
Fiscalía Provincial de Pinar del Río

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL ENTRE LAS PARTES EN LA FASE PREPARATORIA DEL JUICIO ORAL. PRINCIPALES LIMITACIONES EN LA LEY PROCESAL CUBANA VIGENTE Y EN LA PRÁCTICA JURÍDICO PENAL”.

**PALABRAS CLAVES:** Principio de igualdad, Fase Preparatoria, Fiscalía

El principio de igualdad entre las partes, ha sido estudiado desde diferentes aristas, sin embargo, el ángulo de la igualdad entre las partes en la Fase preparatoria del juicio oral, no ha tenido tanto atractivo para los especialistas estudiosos del tema que han privilegiado el análisis de estas cuestiones avistando otras etapas del proceso penal.

Por lo que este principio requiere de un especial estudio en la Fase preparatoria donde se logre determinar sus principales limitaciones en la ley procesal vigente y en la práctica jurídico penal.

En la fase inicial del proceso

penal, el papel de la Fiscalía o Ministerio Público se sobredimensiona sobre el del inculcado no aplicándose en toda su extensión el concepto de igualdad (Aguilera.1914). La única causa que puede justificar esta circunstancia es la finalidad de la averiguación de la verdad y, a nuestro criterio ella no resulta suficiente, en comparación con el contenido de los derechos que le corresponden al acusado, cuando adquiere el status de parte.

El Estado como titular de un derecho contrapuesto introduce el elemento de desigualdad en la relación procesal, y con ello toma una posición preponderante frente al acusado. Ante esto, han reaccionado las legislaciones

modernas y han ido introduciendo fórmulas que permitan ir disminuyendo el abismo que existe en cuanto a la igualdad entre uno y otro sujeto.

Al analizar en la legislación cubana la igualdad de las partes durante la Fase preparatoria del juicio oral, debe partirse desde el momento mismo de la detención del acusado y la posibilidad de contar con asistencia letrada, estar éste sujeto a detención, durante un período de hasta siete días, término en el cual no se le permite acceder al auxilio de un Defensor.

Este resulta uno de los puntos criticados en la Ley de Procedimiento Penal cubana, dado que ello incide en el desequilibrio entre las partes en el



proceso, y el derecho de defensa que le asiste al acusado. El establecimiento de dicho período en la ley, no se atempera con lo establecido en las más modernas leyes procesales como son las leyes de Venezuela, Guatemala, Bolivia y Ecuador, en las que se permite la intervención del defensor desde el mismo momento de la detención o el inicio de las acciones investigativas. Nada se opone, a la disminución de dicho término, y más aún, se le otorgue al acusado la posibilidad de contar con un asistente legal que le auxilie en cuanto a sus derechos, desde el momento de su detención o desde que es involucrado en las pesquisas primarias del proceso investigativo.

Ello se encontraría en correspondencia con los Principios Básicos sobre la función de los Abogados, aprobados en el Octavo Congreso sobre el Delito celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de Septiembre de 1990.

Otro aspecto que resulta cuestionable en la Ley de Procedimiento Penal cubana, en cuanto a la igualdad de las partes en la Fase preparatoria, es la subordinación del status de parte a la aplicación de una medida cautelar, o a la decisión de tramitar el proceso por el Procedimiento Abreviado. Al respecto el artículo 249 de la Ley de Procedimiento Penal, dispone que desde el momento en que se dicte la resolución decretando cualquiera de las medidas cautelares que autoriza dicha ley, el acusado será parte en el proceso.

Cuestionable resulta que adquiera el acusado la condición de parte en dependencia de la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos relacionados con el acontecimiento cometido, con la persona del acusado, la propia

víctima, así como otras circunstancias que se manifiesten alrededor del hecho. Por ende, será variable y sujeto al criterio del actuante, el otorgamiento de la condición de parte.

Ello resulta injusto y carente de un fundamento que resulte sistemático y preciso. Dada la regulación existente no se conocerá, cuando una persona será parte procesal. De lo apuntado anteriormente, se entiende condicionada la condición de parte, a los elementos que determinen el aseguramiento del acusado o la determinación del Procedimiento Abreviado. Este no es el único aspecto que resulta cuestionable, respecto al otorgamiento de la condición de parte procesal, al acusado.

Esta condición se sujeta incluso al criterio de otros sujetos de la propia relación procesal. Tal como regulan los artículos 245, 246 y 247 de la propia ley, pueden asegurar al acusado y por ende otorgar la condición de parte: la Policía, el Instructor Policial y el Fiscal. Deviene ello, lesivo del principio de igualdad. En el caso del aseguramiento del acusado, por parte de la policía o del Instructor policial, serían estos sujetos procesales quienes no sólo determinarían la situación procesal del acusado, sino su condición de parte y el otorgamiento de los derechos que ello supone.

En cuanto al Fiscal, sería una parte quien decidiría la situación procesal y el otorgamiento de derechos procesales a su contrario en la relación procesal. Esto supone la subordinación de una parte a la otra. Interesante resulta el supuesto de la revocación por el Instructor de la medida impuesta por la Policía o dejar sin efecto la detención realizada por este.

Surge la interrogante si una vez que es asegurado el acusado por parte de la Policía y adquiere este la condición de parte, el hecho de revocarse la medida por parte del Instructor implicará la pérdida del status adquirido.

Lo mismo acontece cuando es el Fiscal quien dispone la libertad del acusado o la revocación de la medida impuesta por el Instructor. Ante este supuesto, y luego de obtenida la condición de parte, dado el aseguramiento del acusado, si es revocada la medida cautelar, no se pierde la condición que fuera otorgada. Si bien la aplicación de la medida cautelar determina y condiciona el otorgamiento del status de parte, una vez otorgado éste no se subordina ni depende el mismo, del mantenimiento de la medida. Lo cuestionado respecto a las autoridades que aplican la medida cautelar resulta igualmente de aplicación al trámite de modificación de la medida cautelar, regulado en el artículo 251.

En relación con el aseguramiento del acusado la legislación procesal cubana ha sufrido cambios que han modificado de manera sustancial el procedimiento a aplicar, tomando como base para ello, criterios que van desde la no contaminación del órgano jurisdiccional con las diligencias de la Fase preparatoria hasta la obtención de celeridad en el proceso.

Otra manifestación de la diferenciación que existe entre los derechos del acusado y la Fiscalía, y la subordinación de los derechos del primero al segundo, se ubica en la determinación del carácter secreto del Expediente de Fase Preparatoria, por parte de la Fiscalía. Con ello se posterga el ejercicio de determinados derechos hasta la conclusión de la fase investigativa.

Un elemento más en el cual se manifiesta la desigualdad antes apuntada y la subordinación de una parte a la otra, se encuentra en la potestad que posee el Instructor, y el Fiscal, en última instancia; de admitir las pruebas que proponga el acusado. El artículo 249 en su párrafo tercero, faculta al Defensor del acusado asegurado a proponer pruebas y presentar documentos. Esta facultad no resulta ilimitada y las pruebas propuestas no implican su obligatoria aceptación. Puede el Instructor o el Fiscal denegar la admisión de las mismas, debiendo para ello dictar resolución donde justifiquen las causas de la denegación de dichas pruebas.

Ante esta situación, puede hacer el acusado, uso de los medios impugnatorios mediante el Recurso de Queja. Realmente constituye esto una manifestación de la subordinación de los derechos de una parte a las facultades de un sujeto procesal o de la otra parte. Ello pudiera provocar un desequilibrio en la relación procesal al verse impedido el acusado de interesar la aportación al proceso de los elementos sostenedores de su tesis de defensa o verificadores de su verdad respecto a los hechos que se investigan.

Otorgar la facultad de controlar las investigaciones e inclusive practicarlas por sí, es un acierto de la ley de procedimiento cubana, lo cual la ubica junto a las legislaciones más modernas pero la concesión al Fiscal de determinadas facultades relativas a la figura del acusado, implica un aumento de sus facultades en la Fase preparatoria, lo cual conlleva al desequilibrio en la relación procesal en esta fase el proceso. Se perfilan dos partes procesales en posiciones desiguales, donde una

se subordina a la otra de forma tal, que permite que su contrario sea quien determine cuando debe alcanzar la condición de tal y ser titular de sus derechos procesales.

Los cambios que han tenido lugar en la legislación procesal cubana, están dirigidos en el sentido de apartar al órgano jurisdiccional, de las diligencias correspondientes a la Fase preparatoria del Juicio Oral. Esto resulta positivo cuando se funda en el principio de la no contaminación del Juez con el material prejudicial, siendo igualmente acertado cuando se basa sobre el criterio de celeridad procesal.

El análisis de ello resulta oportuno, y sin desconocer la realidad actual de la labor de nuestros Tribunales, debe corresponderle al órgano jurisdiccional, intervención en determinadas diligencias que implican restricción a los derechos fundamentales del procesado, tales como: la determinación de su situación procesal y la aprobación o denegación de las pruebas propuestas por la parte acusada, fundamentalmente.

No se propone el restablecimiento de la figura del Juez de Instrucción, sino que se analice la factibilidad de que sea éste sujeto procesal, u otro distinto a las partes, quien resuelva las diferencias procesales que con carácter esencial, surjan entre ellas y garantice los derechos de uno u otro.

### CONCLUSIONES

1. El derecho de defensa que le asiste al imputado, debe ser reconocido desde el momento mismo en que el proceso se dirige en su contra, protegiéndole a todo lo largo de este. No obstante su reconocimiento, el ejercicio del

derecho de defensa, no posee valor práctico alguno hasta que no le sea reconocido al acusado la condición de parte procesal.

2. El proceso penal cubano, resulta susceptible de análisis a fin de establecer modificaciones en relación con la igualdad de las partes en el proceso. Estas se ubican, durante la Fase preparatoria del juicio oral y comprenden: la posibilidad de contar con asistencia letrada desde el momento mismo de la detención del acusado; la subordinación del status de parte al criterio de otros sujetos de la propia relación procesal, la determinación del aseguramiento del acusado y del carácter secreto de las actuaciones, la admisión de las pruebas propuestas por el acusado, todo lo que queda sujeta a la decisión de la Policía, el Instructor o la parte contraria, el Fiscal.

3. Resulta positivo y acertado que ostente la Fiscalía el control de las investigaciones, pero la concesión al Fiscal de determinadas facultades debe ser susceptible de modificación. Debe reservarse al órgano jurisdiccional, intervención en determinadas diligencias que implican restricción a los derechos procesales fundamentales, tales como la determinación de la situación procesal, la sujeción a medida cautelar del imputado y la aprobación o denegación de las pruebas propuestas por la parte acusada.

### BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera de Paz. Enrique. 1914. "Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Editora Hijos de Reus. Madrid, España.
- Ley No. 5. Ley de Procedimiento Penal cubana.

## LA PREVENCIÓN SITUACIONAL Y LOS CONTROLES TECNOLÓGICOS”.

**Autora: Lic. Yilian Fonseca Castellanos**  
Fiscal de Fiscalía Municipal de Ciego de Ávila

**Lic. Karel Roberto Alonso Rodríguez**  
Ciego de Ávila

### RESUMEN

La Prevención Situacional surge por la necesidad de estudiar las alternativas pertinentes para la prevención de la delincuencia, como fenómeno complejo que tiende a ampliarse. El objetivo de este artículo es fundamentar los principales aspectos teórico-doktrinales que versan sobre la Prevención Situacional y los Controles Tecnológicos como variante actual de la prevención de los delitos. Para ello se aborda el devenir histórico contextual de la Prevención Situacional, su acercamiento conceptual, características, su implementación como método de preservación de la Seguridad Ciudadana, así como mencionamos los diferentes tipos de controles tecnológicos.

### INTRODUCCIÓN

Es cada vez es más apremiante que cada Estado implemente estrategias de prevención y control para alcanzar éxitos reales en materia de seguridad ciudadana<sup>14</sup>, y aunar esfuerzos de autoridades locales, ciudadanos y policías, para contrarrestar la delincuencia que se ha convertido en una amenaza para la sociedad.

Entre los nuevos enfoques de prevención del delito que se vienen aplicando exitosamente en el mundo se encuentra la Pre-

vencción Situacional como método de preservación de la seguridad ciudadana. Esta nueva variante de control social, no se contrapone bajo ningún concepto a los métodos profesionales utilizados por la Policía Nacional para combatir el delito.

Evolución Histórica de la Prevención Situacional

La prevención situacional del delito surgió en 1976 como idea en la unidad de investigación del británico Home Office cuando Ronald Clarke era su director. El Home Office realizó un estudio sobre suicidios. Este descubrimiento significó que cuando a la población se le quitó la oportunidad de emplear su método de suicidio preferido no buscaron necesariamente un método alternativo. Newman (1972) promocionó la vigilancia natural a través del diseño arquitectónico.

Más recientemente, Herman Goldstein (1990) contribuyó en Estados Unidos a la adopción de este tipo de esquemas por la policía a través del desarrollo de la noción de “policía orientada a la solución de problemas”.

### LA PREVENCIÓN SITUACIONAL: SU ACERCAMIENTO CONCEPTUAL Y ALCANCE

La prevención situacional del delito<sup>15</sup>, se podría emplear para prevenir el miedo al delito u otras conductas infractoras de la ley que no llegan a constituir delitos, alcanza su máxima expresión en

la modificación del ambiente para hacer el delito más difícil y arriesgado, a partir de la reducción de los beneficios o recompensas. Se dirige a rediseñar preventivamente los elementos situacionales, temporales y espaciales que rodean al delito (Median Ariza. 1997: 271-327). Las medidas de reducción de oportunidades han de ser dirigidas a formas muy específicas de criminalidad (Clarke. 1992).

### II. CARACTERÍSTICAS DE LA PREVENCIÓN SITUACIONAL

La prevención situacional del delito es un nuevo modelo de prevención del delito inspiradas en las teorías del crimen (González Rodríguez. 2014) las que le otorgan gran importancia a la noción de oportunidad pues el delito se manifiesta donde sea oportuno, tanto en espacio, tiempo y lugares propicios y propugna el incremento de las policías privadas, de la industria de la seguridad privada, de la tecnología de la vigilancia.

### III, LA PREVENCIÓN SITUACIONAL COMO MÉTODO DE PRESERVACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

La Seguridad Ciudadana (Carhuamaca Zereceda. S/A) es responsabilidad del Estado y como deber del mismo implica preservar la tranquilidad individual y colectiva de la sociedad ante peligros

que pudieran afectarla. Se han suscitado varias posiciones doctrinales en ese sentido y se han pronunciado José Manuel Zubiete<sup>16</sup> y José Portugal Ayestas<sup>17</sup>. Se han desarrollado diferentes enfoques conceptuales de la seguridad ciudadana; desde una visión conceptual reductiva que se le atribuye el significado casi exclusivo a la locución “seguridad” que es precisamente el de la protección frente a la delincuencia (Diez Ripollés. 2004) y la conceptual amplia que no es reducible al evento delictivo.

La Prevención Situacional se basa en las Teorías del Crimen<sup>18</sup> que le otorgan gran importancia a la noción de OPORTUNIDAD. Las principales Teorías del Crimen (Gottfredson y Hirschi. 1990) que fundamentan la Prevención Situacional del delito son las siguientes: La teoría de las actividades rutinarias, La Teoría de los estilos de vida, La Teoría de la elección racional, La Teoría del espacio defendible.

**La teoría de las actividades rutinarias:** que para que un crimen ocurra es necesaria la convergencia en tiempo y en espacio (Brantingham y Brantingham. 1991) de los siguientes tres elementos: la presencia de un delincuente motivado, la presencia de un objetivo alcanzable, y la ausencia de un guardián capaz de prevenir.

**La Teoría de los estilos de vida:** Las diferencias entre los grupos demográficos respecto a su probabilidad de ser victimizados se explican por las diferencias en los estilos de vida de sus miembros.

**La Teoría de la elección racional:** El delincuente se considera un ser relativamente racional que toma decisiones sobre su comportamiento, basadas en un análisis de los daños y beneficios del acto

delictivo.

**La Teoría del espacio defendible<sup>19</sup>:** Uno de los elementos más importantes consistía en promocionar la vigilancia natural a través del diseño arquitectónico.

**Técnicas aplicadas en la Prevención Situacional se agrupan en cuatro grandes conjuntos:** aquellas orientadas a incrementar la percepción de esfuerzo asociado con un particular delito, las que incrementan la percepción de riesgo, aquellas orientadas a reducir las potenciales recompensas, y, finalmente, aquellas orientadas a incrementar los sentimientos de culpabilidad o vergüenza.

#### IV-LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CONTROLES TECNOLÓGICOS

Se han creado disímiles artefactos de prevención situacional del delito como los sistemas de videovigilancia (Agustina Sanllehí. 2009) en lugares públicos, videocámaras en las calles de nuestras ciudades por los órganos públicos encargados de la prevención y persecución de los delitos, así como otros dispositivos de las modernas tecnologías de la información, como los grilletos electrónicos y controles satelitales GPS, las etiquetas identificativas o la activación a distancia de ciertos efectos corporales.

Las etiquetas RFID<sup>20</sup>, (Radio Frequency Identification) son un circuito o chip con memoria de datos capaz de ser leído, escrito y reescrito sin contacto directo, vía ondas de radio usando antenas. El sistema de fichaje, mediante el cual la policía fija fotográficamente a todas las personas que son objeto de detención, tomando imágenes de frente y de perfil, así como elementos distintivos o

característicos, este método de control ofrece muchas bondades, pero constituye uno de los más estigmatizadores por el hecho de enrolar personas sin haber sido vencidas en juicio.

El sistema de identificación de huellas, funciona sobre la base de huellas dactilares, a través del reconocimiento de patrones. El banco de ADN, este es uno de controles tecnológicos que se implementa a través de las ciencias biológicas más novedoso y a la vez invasivo pues implica la extracción de sangre y saliva.

#### CONCLUSIONES

1. La Prevención Situacional es de origen anglosajón, es una prevención que se dirige a rediseñar elementos situacionales, temporales y espaciales del suceso delictivo, se limita a neutralizar las oportunidades o condiciones propiciatorias de delito.

2. La Prevención Situacional constituye una de las principales acciones adoptadas actualmente para proteger la Seguridad Ciudadana. Es un enfoque relativamente nuevo basado en las Teorías del Crimen que poseen como elemento común el uso de la noción de oportunidad. Para estas teorías, el delito se concentra en espacios y momentos específicos a partir de su relación con las oportunidades existentes para la comisión de delitos.

3. La Prevención Situacional es una alternativa al Derecho Penal donde el Estado como forma de prevenir a la delincuencia hace uso de medios de control total del ciudadano, lo que consiste en un peligro futuro, con el uso de controles informáticos, audiovisuales y de fichamiento generalizado



pues implica una invasión en los derechos fundamentales de los ciudadanos, es altamente intrusiva en la vida privada.

#### BIBLIOGRAFÍA:

Agustina Sanllehí, José R. 2009. "Prevención del delito en la empresa: Límites éticos – jurídicos en la implementación de sistemas de videovigilancia". Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm.11-10. Disponible en Internet: <http://criminnet.ugr.es/recpc/11/recpc11-10.pdf>

Brantingham, Paul J., y Brantingham, Patricia L. 1991. "Environmental Criminology" 2ª edition, Prospect Heights, IL: Waveland Press.

Carhuamaca Zereceda, D. S/A. "Seguridad ciudadana,

Derechos Humanos y policía." En: Monografías.com. Disponible en World Wide Web: <http://www.monografias.com/trabajos28/seguridadciudadana/seguridadciudadana-na2.shtml>. Consultado 10/11/2014.

Clarke, Ronald V. 1992. "Situational Crime Prevention, Successful Case Studies". Harrow and Heston, Albany, New York, Estados Unidos.

Diez Ripollés, José L. 2004. "El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana." Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm, 06-03. Disponible en internet: <http://criminnet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf>

Goldstein, Herman.1990. "Problem-Oriented Policing". McGraw Hill, New York, Estados Unidos.

González Rodríguez, Marta. 2014. "Seguridad Ciudadana y miedo al delito", Notas de Conferencias de Curso en la Maestría en Ciencias Penales y Forenses, Universidad Central de las Villas, Villa Clara, Cuba.

Gottfredson, Michael y Hirschi, Travis. 1990. "A General Theory of Crime". Stanford University Press, Stanford, Estados Unidos.

Median Ariza, Juan J. 1997. "El control social del delito a través de la prevención situacional". Cuadernos de Derecho Judicial, volumen XV, La Criminología Aplicada. Editado por el Consejo General del Poder Judicial, Madrid, España.

Newman, Oscar. 1972. "Defensible Space: Crime Prevention Through Urban Design". MacMillan, New York, Estados Unidos.



14. La Seguridad Ciudadana es la garantía del orden social y la protección de la sociedad hacia lo interno como principal función del Estado, a través de las intervenciones de la fuerza pública y otras instituciones destinadas a prevenir y controlar el delito y la violencia, donde la Policía Nacional juega un rol importante conjuntamente con otras instituciones en cualquier Estado.

15. Hace referencia al temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de la delincuencia, puede además definirse como la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo realmente existente o maligno.

16. "Seguridad Ciudadana es aquella situación que permite el desarrollo de un "clima de paz, de convivencia y confianza mutua, que permite y facilita a los ciudadanos el libre y pacífico ejercicio de sus derechos individuales, políticos y sociales"

17. "la seguridad es la necesidad básica de la persona, los grupos humanos y constituye un derecho humano inalienable que debe garantizar la sociedad y del Estado".

18. Conviene resaltar que las teorías del crimen y las teorías de la criminalidad no son incompatibles, sino complementarias en la medida en que explican diferentes dimensiones del problema criminal. Brantingham y Brantingham (1991) explican el delito como un elemento complejo con diferentes dimensiones: la ley, el delincuente, el objetivo, y el lugar. Hoy posiblemente una quinta dimensión: el tiempo. Las teorías de la criminalidad sólo analizan las dos primeras dimensiones, mientras que las teorías del delito analizan las tres últimas.

19. En 1980 Hough, Clarke y Mayhew ofrecieron una clasificación inicial de técnicas de prevención situacional que contenía ocho categorías. En 1992 Clarke añadió cuatro más como consecuencia de la avalancha de estudios que se produjo en ese período y la imposibilidad de la clasificación inicial de capturar algunas de las nuevas técnicas experimentadas. Finalmente, en 1996 Clarke y Homel desarrollando la clasificación inicial incorporaron cuatro categorías adicionales a las doce existentes. Estas dieciséis técnicas de prevención situacional se agrupan a su vez en cuatro grandes conjuntos: las orientadas a incrementar la percepción de esfuerzo asociado con un particular delito, las que incrementan la percepción de riesgo, aquellas orientadas a reducir las potenciales recompensas, y, finalmente, aquellas orientadas a incrementar los sentimientos de culpabilidad o vergüenza.

20. Tienen un tamaño variable, algunas son de centímetros y otras de unos pocos milímetros, pero la tendencia es ir hacia una mayor miniaturización, las aplicaciones actuales son muy diversas, desde la identificación de contenedores, rastreo de productos en proceso, para los sistemas de control de peajes, entre otras. Las frecuencias más usadas van desde 125 Khz hasta la banda ISM, (Industrial Scientific and Medical) de 2.4 Ghz. Sistemas como este ya están siendo aplicados en peajes de autopista y entrada a determinados parkings, también en algunas Estaciones de Servicio Exxon en Estados Unidos.

# LOS FISCALES RESPONDEN

EN ESTA EDICIÓN CONTESTAMOS  
DIVERSAS PREGUNTAS REALIZADAS POR  
LOS CIUDADANOS SOBRE MATERIA DE  
VIVIENDA.

**1. Esteban pregunta si una persona pretende permanecer en su vivienda contra la voluntad de él, quien es el propietario. Pregunta: ¿qué puedo hacer?**

**E**l artículo No. 64 de la Ley General de la Vivienda establece que los propietarios de los inmuebles determinarán libremente qué personas convivirán con ellos, y estarán facultados para dar por terminada dicha convivencia. De igual forma podrán disponer de los inmuebles, es decir permutarlos, enajenarlos o donarlos.

La autoridad competente para conocer del asunto es la Dirección Municipal de Vivienda, quien a solicitud del propietario, dictará Resolución, si procede, conminando al conviviente a abandonar la vivienda dentro del plazo de 30 días naturales siguientes a la fecha de la notificación de la Resolución.

Transcurrido el plazo sin que la abandone se le comenzará a realizar un descuento mensual, por concepto de uso no autorizado del inmueble, ascendente al 30% de cada ingreso, de mantenerse por tres meses esa situación, las retenciones se elevarán al 50%. En casos de elementos de conducta antisocial, no vinculados a centros de trabajo, que se nieguen a cumplir lo establecido podrán ser obligados por la fuerza pública.

La ley establece los casos específicos en los cuales el propietario no podrá ejercer ese derecho, como por ejemplo contra sus ascendientes y descendientes, madre con uno o más hijos habidos en el matrimonio formalizado o no que tenga la guarda y

cuidado de los hijos y no tiene otro lugar de residencia o madres que llevan tres o más años ocupando la vivienda y tampoco tienen lugar de residencia, y ancianos que llevan tres o más años ocupando la vivienda y no tienen otro lugar donde vivir.

**2. Andrés explica que su familia le dejó una vivienda en herencia de la que es su propietario legal, la cual está arreglando, razón por la se encuentra residiendo en la casa de otros familiares. Ahora al llegar a su propiedad se encuentra que un ciudadano rompió la ventana y entró a vivir en ella. Pregunta: ¿qué hacer para sacarlo de esta?**

La Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, establece en su Capítulo VIII, artículos del 11 al 115 que el propietario de una vivienda puede declarar, ante la Dirección Municipal de la Vivienda en la que se encuentre enclavado su inmueble, ocupante ilegal a esta persona, por haber entrado en su vivienda sin su consentimiento, la autoridad antes mencionada dispone de un término de 30 días para declararlo o no ocupante ilegal.

**3. Rosmery plantea que tiene una vivienda en propiedad, la que posee diferentes mediciones a las que realmente aparecen en el expediente básico de ella y quiere que sean rectificadas los límites y linderos, porque su vecino ocupa parte de su solar, bajo la creencia que le pertenece. Pregunta: ¿ante quién debo dirigirme?**

Las modificaciones establecidas por el Decreto Ley No. 322 de 2014 a la Ley No. 65, Ley General de la Vivienda, establece que son competentes para el trámite las Direcciones Municipales de Planificación Física, los que tendrán competencia para definir los límites y linderos que a cada propietario corresponde; por lo que debe dirigirse a esta instancia.

**L**a Fiscalía General de la República, desde su conformación como Órgano del Estado en 1973, ha contado con cinco fiscales generales, que han sido los siguientes:

- José Santiago Cuba Fernández, designado por Decreto No. 3729 de 27 de junio de 1973.
- Idalberto Ladrón de Guevara Quintana, designado por Acuerdo de 10 de enero de 1980.
- Ramón de la Cruz Ochoa, designado por Acuerdo de 18 de enero de 1986.
- Juan Escalona Reguera, designado mediante Acuerdo de 28 de junio de 1993.
- Darío Delgado Cura, elegido mediante Acuerdo de 22 de marzo de 2010.

#### **Se han desempeñado como Vice-fiscal General de la República:**

- René Buguet Flores
- Omar Cárdenas González
- José Luis Toledo Santander
- Rafael Pino Bécquer
- Carlos Raúl Concepción Rangel
- Marlen Fernández Machado
- Yamila Peña Ojeda
- Mayor Mario Albarello García
- Teniente coronel Felipe Alemán Cruz
- Teniente coronel Fermín Pérez Guerrero
- Coronel Juan Raudell Risell Collazo

#### **¿QUÉ ES EL GAFILAT?**

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental de base regional que tiene como objetivos promover la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Dicha organización está integrada por 16 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa

Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Como observadores participan diversos Estados y organismos internacionales que prestan apoyo y cooperación técnica y financiera.

El GAFILAT funciona a través de un Pleno de Representantes, compuesto por delegados designados de cada Estado Miembro y dirigido por el Presidente, que es elegido entre uno de sus miembros y cuya gestión es anual. El Consejo de Autoridades es su órgano supremo y está integrado por un representante de cada Estado, el cual ejerce la máxima responsabilidad en materia de lucha contra el lavado de activos. La Secretaría Ejecutiva lleva a cabo las funciones técnicas y administrativas para el desarrollo de las actividades de la organización y la representa ante otros organismos internacionales.

Cuando se creó, el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, el GAFILAT se nombraba Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). En el 2010, con la incorporación al mismo de Costa Rica y Panamá, comienza la adhesión de países que antes pertenecían al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Le siguieron Cuba, Guatemala, Honduras y Nicaragua, lo que determinó la necesidad del cambio de nombre a uno más inclusivo y que representara mejor el crecimiento de miembros de Centroamérica y el Caribe. Por ello, en el XXIX Plenario de Representantes y Grupos de Trabajo de GAFISUD, que se efectuó entre el 7 y el 11 de julio de 2014, se aprobó cambiar el nombre de la entidad al actual.

El mismo, se formó mediante la firma del Memorando Constitutivo

del grupo por los representantes de los gobiernos de diez países. Fue creado bajo el modelo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), organismo constituido por el G-7 en 1989 y al que actualmente pertenecen las 34 mayores economías del mundo. La sede de su secretaría se encuentra en la República de Argentina.

Con la suscripción del Memorando, los miembros adhieren a las Cuarenta Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el lavado de dinero y a las Nueve Recomendaciones Especiales del GAFI contra el financiamiento del terrorismo. Periódicamente, los países verifican el grado de avance en la implementación de estos estándares mediante evaluaciones mutuas.

Estas Recomendaciones requieren, entre otras materias, la tipificación del delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo; el establecimiento no solo del narcotráfico como delito base, sino también de otros delitos graves; la construcción de un sistema de prevención del delito que incorpore obligaciones para el sistema financiero y para otros agentes económicos, de identificación del cliente y comunicación de operaciones sospechosas; la incorporación en los sistemas legales de medidas que permitan perseguir eficazmente el delito en las fases de investigación y en el proceso; y el desarrollo de los más avanzados mecanismos de cooperación entre Estados para la investigación y persecución del delito.

# GLOSARIO

## DE TÉRMINOS JURÍDICOS

### **IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT O IGNORANTIA LEGIS**

**NEMINEM EXCUSAT**, proviene del latín, se traduce como ‘la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley’) es un principio de Derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa, porque rige la necesaria presunción o ficción legal de que, habiendo sido promulgada, han de saberla todos.

(Fuente: Wikipedia)

**IURIS TANTUM**, locución latina que se usa tan solo en derecho. Da a entender que la ley presume la existencia de algún hecho, salvo que se pruebe lo contrario. Como ejemplo de presunciones iuris tantum puede citarse el nacimiento con vida de las personas, cuando existe duda sobre esa circunstancia; la muerte simultánea de las personas fallecidas en un desastre común; la voluntariedad de la entrega, por el acreedor, del documento original acreditativo de la deuda que se halle en poder del deudor; el ánimo de defraudar a los acreedores mediante actos que les sean perjudiciales, cuando aquel se encuentra en estado de insolvencia.

(Fuente: Ossorio, M. 2000. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Ed. Eliasta, Ed. 27º, Buenos Aires, Argentina. p. 538)

**CONCIENCIA DE LA ANTIJURIDICIDAD** es «conocimiento de la obligatoriedad con carácter general y de la inviolabilidad del valor perdido y, por tanto, del carácter jurídico... de la norma lesionada».

(Fuente: Günther Jakobs. 2009. Dolus malus. InDret revista para el análisis del derecho. Pag.5)



# CONVOCATORIA

## RENDICIÓN DE CUENTA A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR 2017

**E**n el mes de diciembre de 2017, corresponde rendir cuenta de nuestra gestión al órgano supremo del poder del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 de la Constitución de la República y el 3.1 de la Ley No.83 de la Fiscalía General de la República; e informaremos el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en el año 2011.

Para ello se han previsto acciones en todos los órganos de la Fiscalía, en un amplio proceso donde participan los trabajadores a todos los niveles, lo que debe constituir motivación para evaluar con profundidad la labor desplegada en estos cinco años y lo que nos falta en el cumplimiento de nuestra gestión, convencidos de que la ética, el sacrificio, constancia, unidad y el acompañamiento a la generación histórica, el General de Ejército, el Partido y el legado del invicto Comandante en Jefe, priman en nuestra labor diaria.

Por ello convocamos a todos los trabajadores de la Fiscalía General de la República con la alegría, dinamismo y profundidad que nos caracteriza a participar de manera activa en el proceso de cada territorio y reafirmar en los escenarios en que se desarrolla el País, el compromiso con la Revolución y el heroico pueblo cubano del que somos parte y al que nos debemos en el cumplimiento de nuestras funciones.

**DARÍO DELGADO CURA**

# CONVOCATORIA



## XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2018 Y II EVENTO LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD

mentalmente a fiscales, procuradores, abogados, jueces, policías, penitenciaristas, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legales, psiquiatras forenses, funcionarios que atienden menores víctimas y con trastornos de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores jurídicos, profesores y estudiantes universitarios, entre otros especialistas interesados en la materia.

### PRINCIPALES EJES TEMÁTICOS:

- Prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas y migrantes
- Delitos económicos y funcionariales
- Delincuencia transnacional y el cibercrimen
- Terrorismo
- Lavado de activos
- Crimen ambiental
- Tráfico ilegal de menores y explotación sexual
- La ejecución de la pena en las personas privadas de libertad
- La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal. Retos actuales y futuros
- El Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la Corrupción
- El fortalecimiento del papel de control del Estado, como garantía para mejorar la gestión pública, prevenir y aminorar las manifestaciones de Corrupción
- Tratamiento legislativo a la lucha contra la Corrupción
- Desarrollo contemporáneo del

Derecho, en cuanto al enfrentamiento a la Corrupción

- El Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la Corrupción
- Organismos internacionales y las relaciones intergubernamentales en la lucha contra la Corrupción
- Protección y atención a la violencia en el seno de la familia
- Delitos relacionados con los niños y las niñas
- Explotación laboral del menor
- Relaciones paterno filiales y función tuitiva del Estado
- Tutela Penológica de niños y niñas
- Leyes Migratorias y Minoridad
- El control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía

### PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON:

#### MSC. PATRICIA MARÍA RIZO CABRERA

Coordinadora Comité Organizador  
Teléfono: (537) 206- 61- 22  
E-mail: relaciones@fgr.gob.cu

#### MSC. HORTENSIA BONACHEA RODRÍGUEZ

Coordinadora Comité Organizador  
Teléfono: (537) 212- 56-14  
E-mail: hortensia@fgr.gob.cu

#### LIC. MIGDALIA LUNA CISNEROS

OPC. Palacio de Convenciones de la Habana  
Teléfono: (537) 208- 61- 76  
E-mail: Migdalia@palco.cu  
Más información en [www.fgr.gob.cu](http://www.fgr.gob.cu)

La Fiscalía General de la República de Cuba convoca al XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018 y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que tendrá lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, en el del 14 al 16 de marzo de 2018.

El Encuentro se realizará con el auspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, Tribunal Supremo Popular, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba.

El objetivo fundamental es propiciar el intercambio de experiencias entre profesionales de diferentes países, que contribuya al estudio y solución de las disímiles problemáticas que se presentan en el quehacer jurídico, relacionadas con el Derecho Penal a escala internacional y otras ramas del Derecho que impactan directamente en el desarrollo de la sociedad.

El evento va dirigido funda-